**CONDICIONES PARA LA PRIVACIÓN DE LIBERTAD DE NIÑOS, NIÑAS
Y ADOLESCENTES EN COLOMBIA DE CARA A LOS ESTÁNDARES
INTERNACIONALES**

NANCY ELVIRA RUANO RESTREPO

ANA MARÍA JIMÉNEZ PAVA
DIRECTORA DE TRABAJO DE GRADO

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS

**MAESTRÍA EN DEFENSA DE DERECHOS HUMANOS ANTE CORTES Y
TRIBUNALES INTERNACIONALES**

2019

TABLA DE CONTENIDO

Introducción	4
1.1. Derecho a la libertad	8
1.2 Limitaciones o restricciones al derecho a la libertad	11
1.3. La privación de libertad de niños , niñas y adolescentes	14
La privación de los niños, niñas y adolescentes en Colombia	26
2.1 La privación de la libertad antes del siglo XX	27
2.2 El código del menor	28
2.3 Código de la Infancia y la Adolescencia	31
2.5 Condiciones para la privación de la libertad de niños, niñas y adolescentes	33
2.6 Privación de la libertad de carácter preventivo	38
2.7 Privación de la libertad como sanción	40
2.8 La privación de la libertad de niños, niñas y adolescentes en Colombia como último recurso y en establecimientos separados de los adultos	45
3.1. Relevancia de los estándares internacionales en los sistemas de responsabilidad penal juvenil	45
3.2. La privación de la libertad como último recurso y por el menor tiempo posible	48
3.3 Poco uso del principio de oportunidad	51

3.4 Consideración de la privación de libertad como mecanismo de protección y garantía de derechos	53
3.5. La privación de la libertad como medida pedagógica	57
3.6. Prevención de la delincuencia juvenil	60
CONCLUSIONES	64
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	65

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo propone establecer si la Ley de Infancia y Adolescencia (Ley 1098 de 2006) incorpora los estándares internacionales frente a la privación de la libertad de niños, niñas y adolescentes, como medida sancionatoria en el país, a partir del contraste normativo y determinar si en la práctica dichos estándares se aplican a cabalidad según informes de monitoreo del SRPA. Para este fin, se consultaron los estándares de protección a los derechos de los niños, niñas y adolescentes cobijados con dicha sanción, en particular la Declaración de los Derechos del Niño, la Convención de los Derechos del Niño, las Reglas de Beijing, las Directrices de la de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil (Directrices RIAD) las Reglas de la Habana y las Reglas de Tokio.

Grosso modo, el objetivo general del trabajo es establecer si la Ley de Infancia y Adolescencia (Ley 1098 de 2006) incorpora los estándares internacionales frente a la privación de la libertad de niños, niñas y adolescentes, como medida sancionatoria en el país, a partir de un análisis sistemático y contraste normativo.

Los objetivos específicos son:

- Identificar los instrumentos del derecho internacional y de los DD.HH enmarcados dentro de los estándares relacionados con la privación de la libertad de niños, niñas y adolescentes;
- Establecer cuáles han sido los contextos normativos que han regulado esta materia en el país.

- Analizar la relevancia de dichos estándares en los sistemas de responsabilidad penal juvenil de cara a su implementación según informes de monitoreo del SRPA.

El método de investigación empleado es cualitativo, este tipo de método es definido por Saldaña y Hernández (2001) de la siguiente manera: “La investigación cualitativa pretende finalmente la comprensión e interpretación de las experiencias subjetivas del investigador y de los involucrados respecto de lo que ocurrió u ocurre en el contexto del fenómeno; la exploración de los significados que las cosas tienen para las personas; la recuperación del punto de vista de los autores, y la comprensión de los significados que un fenómeno o situación tiene para las personas” (modelos de investigación cualitativa y cuantitativa y su aplicación en el estudio del derecho. 2016. p. 17). Este método permite profundizar en el tema de la privación de responsabilidad a partir de una concienzuda revisión bibliográfica de fuentes documentales como: tratados y directrices internacionales como la Declaración de los Derechos del Niño, la Convención de los Derechos del Niño, las Reglas de Beijing, las Directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil (Directrices RIAD), las Reglas de la Habana y las Reglas de Tokio. En consecuencia, la tipología de investigación es la teórico-documental realizando un ejercicio de naturaleza comparativa entre los estándares internacionales y los nacionales conforme al módulo 56 de investigación de la Facultad de Derecho de la USTA (2008).

En el primer capítulo se verá cómo a través de una pluralidad de tratados, convenciones, pactos y reglas, la comunidad internacional se ha encargado de diseñar una serie de lineamientos tendientes a la protección especial de los niños, niñas y adolescentes

privados de la libertad como consecuencia de la comisión de delitos. Esto en virtud de que presentan mayor vulnerabilidad y debilidad frente a los adultos y, al estar internados en establecimientos carcelarios, se exponen a un mayor riesgo de ser afectados en sus derechos fundamentales.

Como se plantea en el capítulo, en 1998, en su 9º Informe General, el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes (CPT) estableció los criterios que orientan su labor al visitar los lugares en los que las personas menores de 18 años de edad están privados de libertad. En particular, este Comité identificó una serie de salvaguardias que deberían ofrecerse a todos los niños, niñas y adolescentes privados de libertad con arreglo a la legislación penal, así como también las condiciones que deberían observarse en los centros de detención concebidos específicamente para niños, niñas y adolescentes. Dichos criterios serán abordados a profundidad en este capítulo.

En el segundo capítulo, descendiendo al ámbito nacional, se abordan los derechos de los niños, niñas y adolescentes privados de la libertad, tal como fue reglamentado en el código del menor (decreto 2737 de 1989) y como se encuentra actualmente establecido en la Ley de infancia y adolescencia (Ley 1098 de 2006). Así mismo, se ahondará en las características del SRPA y las finalidades de la sanción privativa de la libertad, de acuerdo a lo establecido en el Código de Infancia y Adolescencia. Será objeto de estudio: la privación de la libertad como último recurso, por el menor tiempo posible, en

establecimientos separados de los adultos y como sanción pedagógica, desde la perspectiva de los derechos humanos.

El tercer capítulo consiste en un análisis crítico de la aplicación de la medida sancionatoria privativa de la libertad a los niños, niñas y adolescentes (en adelante N.N.A) con fundamento en fuentes que emitieron resultados, balances y conclusiones sobre la situación de los jóvenes privados de la libertad en Colombia. Las fuentes consultadas consisten en informes de monitoreo, balances y seguimiento de entidades como la Defensoría del Pueblo, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Procuraduría General de la Nación, la Comisión de Evaluación del sistema de Responsabilidad Penal de Adolescentes y el Ministerio de Justicia; estos insumos permitirán establecer si el SRPA cumple con los estándares internacionales en la aplicación de la sanción mencionada.

A posteriori, se realiza una disertación, en torno a la prevención de la delincuencia juvenil en Colombia.

CAPÍTULO I

ESTÁNDARES INTERNACIONALES EN MATERIA DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD EN LOS SISTEMAS PENALES JUVENILES

1.1. Derecho a la libertad

Para dar inicio a este capítulo es relevante aprehender el derecho a la libertad, desde lo filosófico y posteriormente se abordará el mismo desde el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos, específicamente en lo que al derecho a la libertad de los niños, niñas y adolescentes, se refiere, remitiéndonos a las diferentes reglas y estándares internacionales. Para profundizar en el tema se citarán algunas sentencias concernientes emitidas por la Corte Interamericana. Frente al primer aspecto, Rosales (s.f. p. 1.) manifiesta lo siguiente:

La libertad, como todos los derechos humanos, es inherente a la persona, ya que es propio de la naturaleza humana, es un derecho básico, sin el cual es imposible vivir como seres humanos y crecer dignamente. La libertad, entendida de modo castizamente universal, es la capacidad de hacer lo que queremos. En el arranque de la filosofía moderna. Descartes llama acción libre a cualquier acción deliberada y voluntaria, «y admite a la vez lo absoluto del conocimiento y potencia divinos y la realidad del libre albedrío (del libre albedrío en el sentido de poder optar entre actos indeterminados de antemano y ante los cuales es indiferente la voluntad». Otra corriente de opinión no menos extendida considera la libertad como el derecho de

poder realizar nuestros proyectos sin impedimento alguno. Añadiremos, finalmente, que para Locke «la libertad no pertenece al ámbito de la voluntad y es simplemente el poder de pensar o no pensar y de actuar o no actuar, de acuerdo con la elección de nuestro espíritu.

El derecho a la libertad está consagrado principalmente en los siguientes tratados de derecho internacional:

En la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su preámbulo esboza que: “la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana” (Declaración de Derechos Humanos, 1948, p. 1).

No solo el preámbulo trata acerca del tema de la libertad, si no en varios de los artículos de esta Declaración dentro de lo más destacado se encuentra: art. 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad, derechos y libertades, art. 2. Sin distinción de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, el art. 9. Establece que no serán sometidos los niños, niñas y adolescentes a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, ni

podrán ser arbitrariamente detenidos, presos, ni desterrados (Declaración de Derechos Humanos, 1948, p. 1).

En su artículo 9 Inciso 1, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDC) establece que “todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. Ni tampoco nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por la ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta” (Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 1966, p. 20).

De igual modo, el artículo 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o del Pacto de San José de Costa Rica (1978), dispone que:

Toda persona tiene derecho a la libertad, a la seguridad personal y nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas previstas con anterioridad por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas. Cabe resaltar que nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrario (p. 3).

La Convención sobre los Derechos del Niño establece, en su artículo 37 que: “No se impondrá la pena capital ni la de prisión perpetua sin posibilidad de excarcelación por delitos cometidos por menores de 18 años de edad; no será privado de su libertad ilegal o arbitrariamente” (Convención sobre los Derechos del Niño, 1989, p. 1).

La Corte Interamericana ha señalado en el Caso Tibi Vs. Ecuador. Sentencia del 7 de septiembre de 2004 que el derecho a la libertad si se relaciona con otros derechos, al respecto esboza lo siguiente:

Este Tribunal estima necesario realizar algunas precisiones sobre este punto. En primer lugar, los términos de la garantía establecida en el artículo 7.5 de la Convención son claros en cuanto a que la persona detenida debe ser llevada sin demora ante un juez o autoridad judicial competente, conforme a los principios de control judicial e intermediación procesal. Esto es esencial para la protección del derecho a la libertad personal y para otorgar protección a otros derechos, como la vida y la integridad personal. El hecho de que un juez tenga conocimiento de la causa o le sea remitido el informe policial correspondiente, como lo alegó el Estado, no satisface esa garantía, ya que el detenido debe comparecer personalmente ante el juez o autoridad competente. En el mismo sentido: Caso Palamara Iribarne Vs. Chile. Violación del artículo 13 de la Convención Americana en relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma (Derecho a la libertad de pensamiento y de expresión)1.1 Libertad de expresión y censura previa Sentencia de 22 de noviembre de 2005, párr. 221; Caso López Álvarez Vs. Honduras. Sentencia de 1 de febrero de 2006, párr. 87 (Corte Interamericana De Derechos Humanos, 2004, p, 63 párr. 118). Artículo 1 (Obligación de respetar los derechos.), Artículo 13 (Libertad de pensamiento y expresión), Artículo 16 (Derecho a la Libertad de Asociación), Artículo 24 (Igualdad ante la ley), Artículo 25 (Protección Judicial), Artículo 5

(Derecho a la Integridad Personal), Artículo 7 (Derecho a la libertad personal),
Artículo 8 (Garantías Judiciales)

1.2 Limitaciones y restricciones a la privación de libertad de personas menores de 18 años.

Sobre este aspecto Mariño (2013) expone lo siguiente:

El ordenamiento jurídico colombiano acoge y desarrolla el principio de la protección integral en virtud del cual se establece un conjunto de derechos y garantías a favor de los niños, niñas y adolescentes, en tanto son sujetos de protección especial con el fin de garantizar el ejercicio pleno de sus derechos. El derecho a la libertad está ligado al interés superior del niño, ya que permite el goce de todos los derechos, por el contrario, la institucionalización para un adolescente estigmatiza y afirma identidades negativas. Por ello, el principio de la excepcionalidad de la privación de libertad es determinante y se hace necesaria la inclusión y la aplicación de medidas alternativas a la privación de la libertad (p. 11).

En cuanto a la limitación de la libertad JUÁREZ (2016) agrega que se debe considerar:

Toda restricción de la libertad de un adolescente implica considerar, por un lado, a las medidas cautelares que no deberán entenderse como un adelanto de la pena; por el otro, si se trata de la pena impuesta por virtud de una sentencia firme, ésta tampoco deberá entenderse desde la lógica retributiva que prevalece en la justicia para adultos (con los evidentes efectos disocializadores). Por el contrario, habremos de entender que una sanción o una medida cautelar, en el ámbito de la justicia para adolescentes debe ser entendida desde la perspectiva de las políticas públicas, orientadas a su reinserción y reintegración social (p. 3).

La privación de la libertad, requiere ex ante de una ponderación de la necesidad y razonabilidad de la restricción a ese derecho, para proteger otros bienes jurídicos, impidiendo el desbordamiento de la discrecionalidad del estado, este estándar se conoce principio de proporcionalidad. Con relación a este punto JUÁREZ (2017) establece que:

Puesto que el principio de proporcionalidad constituye un límite al *ius puniendi* del Estado, en la medida que el principio ha de regir en toda restricción y/o limitación a la libertad personal de los adolescentes decretada por órganos del Estado. Por lo tanto, cabrá averiguar su alcance en la materia que nos ocupa, habida cuenta de la posibilidad que tienen los jueces en esta materia, de procurar que al momento de privar de libertad a los justiciables, dicha decisión resulte lo menos prolongada posible (p. 1).

A efectos de identificar en qué sentido se ha pronunciado la jurisprudencia internacional sobre la privación de la libertad de los adolescentes, vale la pena citar la sentencia de 14 de mayo de 2013 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Mendoza y otros Vs. Argentina, en la que la Corte estableció: “la responsabilidad internacional de Argentina por la violación de los derechos a la integridad y libertad personales de César Mendoza, Lucas Mendoza, Saúl Roldán, Ricardo Videla y Claudio Núñez, por la imposición de penas de privación perpetua de la libertad sobre éstos, por la comisión de delitos cuando aún eran menores de edad” (Corte Interamericana de Derechos Humanos Caso Mendoza y otros vs. Argentina sentencia de 14 de mayo de 2013, p. 8, párr. 1). En este fallo la Corte se pronuncia frente a la inadmisibilidad de la aplicación de leyes exclusivas de adultos al Derecho Penal Juvenil. Igualmente, la Corte profundizó sobre el derecho a impugnar la sentencia, en la línea trazada para el Derecho Penal de adultos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Otro caso emblemático de vulneración de los derechos fundamentales de los adolescentes privados de libertad es el del Centro de Reeducción del Menor Vs Paraguay (Corte Interamericana de Derechos Humanos Caso “Instituto de Reeducción del Menor” Vs. Paraguay Sentencia de 2 de septiembre de 2004), el cual reviste igualmente especial trascendencia por la caracterización que se hace de la justicia penal juvenil. En dicha sentencia la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó un amplio examen a cerca de las condiciones que deben observarse durante el internamiento, para evitar que vuelvan a ocurrir los graves hechos en el Centro de Reeducción del Menor.

Además se solicitó al Estado la aplicación de las siguientes medidas cautelares:

1. Proveer atención médica así como los medicamentos necesarios al menor.
2. Efectuar el traslado inmediato de los menores al Centro Educativo Itauguá, tal como el gobierno [...] se comprometió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, o acondicionar otras instalaciones de manera que permitan albergar a los menores que actualmente se encuentran en penitenciarías de adultos.
3. Asegurar la completa separación de menores y adultos en el plan temporal de reubicación de los menores en las penitenciarías antes mencionadas.
4. Facilitar el acceso de los menores a sus defensores legales y a sus visitas familiares (Corte Interamericana de Derechos Humanos Caso “Instituto de Reeducción del Menor” Vs. Paraguay. Sentencia de 2 de septiembre de 2004 p, 5, párr., 21).

1.3. La privación de libertad de niños, niñas y adolescentes

La CDN establece que niño es: “todo ser humano menor de 18 años de edad, salvo que en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad” .

En consecuencia, los adolescentes de hasta 18 años de edad son titulares de todos los derechos consagrados en la Convención; tienen derecho a medidas especiales de protección y, “en consonancia con la evolución de sus facultades, pueden ejercer progresivamente sus derechos “(Convención sobre los Derechos del Niño, 1898, artículo 5, p. 1).

En el instrumento aludido, se insta a los Estados Partes para que adopten en la su legislación interna todas las medidas administrativas, legislativas, judiciales y de otra índole a fin de garantizar la protección de los niños, esto se conoce como las medidas afirmativas, cuyo objetivo es el alcance de la igualdad material y efectiva de las personas que como los menores de 18 años, requieren de una protección reforzada.

Para ratificar la prevalencia del interés superior del niño, el preámbulo del Convención Americana sobre los Derechos del Niño establece que éste requiere “cuidados especiales” (Convención sobre los Derechos del Niño, 1989, artículo 23, p. 1), y en el artículo 19 reitera que debe recibir “medidas especiales de protección” (Convención sobre los Derechos del Niño, 1989, artículo 19, p. 1). En ambos casos, la necesidad de adoptar esas medidas o cuidados proviene de las específicas características de los niños, como son su debilidad, inmadurez, fragilidad, vulnerabilidad e inexperiencia.

Ahora bien, el principio rector de Interés Superior del Niño, como instrumento de jurídico interpretación y de ponderación implica también que en todas las decisiones que se adopten en el contexto de la administración de la justicia de niños, niñas y adolescentes, deberá privilegiarse los derechos de aquellos. La Corte IDH en la Opinión Consultiva (2002) ha señalado que:

Los Estados tienen la obligación de reconocer y respetar los derechos y libertades de la persona humana, así como proteger y asegurar su ejercicio a través de las respectivas garantías (artículo 1.1), medios idóneos para que aquéllos sean efectivos en toda circunstancia, tanto el *corpus iuris* de derechos y libertades como las garantías de éstos, son conceptos inseparables del sistema de valores y principios característico de la sociedad democrática. Entre estos valores fundamentales figura la salvaguarda de los niños, tanto por su condición de seres humanos y la dignidad inherente a éstos, como por la situación especial en que se encuentran. En razón de su nivel de desarrollo y vulnerabilidad, requieren protección que garantice el

ejercicio de sus derechos dentro de la familia, de la sociedad y con respecto al Estado. Estas consideraciones se deben proyectar sobre la regulación de los procesos, judiciales o administrativos, en los que se resuelva acerca de derechos de los niños y, en su caso, de las personas bajo cuya potestad o tutela se hallan aquéllos (parr. 93).

Este principio regulador de la normativa de los derechos del niño se funda en la dignidad del ser humano, en las características propias de los niños, y en la necesidad de propiciar el desarrollo de éste, con pleno aprovechamiento de sus potencialidades así como en la naturaleza y alcances de la CDN.

Al respecto el principio 2 de la DDN (1959) establece: el niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios, dispensado todo ello por la ley y otros medios para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este fin, la consideración a que se atenderá será el Interés Superior del Niño.

Para asegurar en mayor medida la prevalencia de este principio rector el preámbulo de la CDN establece que este requiere de “cuidados especiales” y el artículo 19 de la CA señala que deben recibir “medidas especiales de protección”.

En lo que respecta a los niños privados de la libertad, la CDN incorpora además, en su artículo 2, el paradigma de la protección integral al derecho penal juvenil cuando

considera al adolescente como sujeto de derecho; es decir, como una persona con derechos y responsabilidades. También se incluye un conjunto de principios y conceptos que deben ser tenidos en cuenta a la hora de abordar la situación de derechos humanos de los niños y niñas privados de la libertad. El de mayor importancia es el principio de interés superior del niño y la niña que, como ya se advirtió en precedencia, se refiere a que éstos poseen los derechos que corresponden a todos los seres humanos –menores y adultos-, pero además tienen derechos adicionales especiales derivados de su condición de mayor vulnerabilidad, a los que corresponden deberes específicos de la familia, la sociedad y el Estado.

La Corte IDH ha fijado estándares más estrictos para la privación de libertad de niños y niñas, tomando en consideración el mencionado principio del interés superior y, en tal virtud, la privación de libertad solo puede ser utilizada como medida de última *ratio*, con un límite temporal y revisada periódicamente. De igual forma, se requiere de una interpretación diferencial de dichos derechos con respecto a los adultos, teniendo en cuenta que los niños son sujetos que ameritan una especial protección y que requieren de una atención diferencial. Sobre el particular, la Corte IDH, Opinión consultiva OC-17 (2002) ha considerado que:

Es evidente que las condiciones en las que participa un niño en un proceso no son las mismas en que lo hace un adulto. Si se sostuviera otra cosa se desconocería la realidad y se omitiría la adopción de medidas especiales para la protección de los niños, con grave perjuicio para estos mismos. Por lo tanto, es indispensable

reconocer y respetar las diferencias de trato que corresponden a diferencias de situación, entre quienes participan en un procedimiento (p. 73).

Magariños (2018) en la en la causa n° 500000071/2008/TO1/2/CNC2, caratulada “A.D.A. s/ exención de prisión” esboza lo siguiente:

Los niños se diferencian de los adultos tanto en su desarrollo físico y psicológico como por sus necesidades emocionales y educativas. Esas diferencias constituyen la base de la menor culpabilidad de los niños que tienen conflictos con la justicia. Éstas y otras diferencias justifican la existencia de un sistema separado de justicia de niños, niñas y adolescentes y hacen necesario dar un trato diferente a los niños.

La protección del interés superior del niño significa, por ejemplo, que los tradicionales objetivos de la justicia penal, a saber, represión/castigo, deben ser sustituidos por los de rehabilitación y justicia restituida cuando se trate de niños, niñas y adolescentes en conflicto de la ley. Esto puede realizarse al mismo tiempo que se presta atención a una efectiva seguridad pública (p. 2).

Retomando el caso Mendoza y otros Vs Argentina, aludido ut supra (2013), la CIDH estableció que:

Toda decisión estatal, social o familiar que involucre alguna limitación al ejercicio de cualquier derecho de un niño o una niña, debe tomar en cuenta el principio del interés superior del niño y ajustarse rigurosamente a las disposiciones que rigen esta

materia. Respecto del interés superior del niño, la Corte reitera que este principio regulador de la normativa de los derechos del niño se funda en la dignidad misma del ser humano, en las características propias de las niñas y los niños, y en la necesidad de propiciar el desarrollo de éstos, con pleno aprovechamiento de sus potencialidades, así como en la naturaleza y alcances de la Convención sobre los Derechos del Niño (p, 52, párr. 142).

Llamas (2014) en cuanto al deber de adoptar disposiciones en el derecho interno, fundamento relativo a la obligación contenida en el art. 2 de la CADH fue tratado en los párrafos 172 a 183. A continuación se transcribe las partes pertinentes:

La Corte IDH destaca igualmente que al momento de los hechos el artículo 13 del Código Penal de la Nación contemplaba la libertad condicional para las personas sancionadas con prisión y reclusión perpetuas, luego de cumplidos 20 años de condena. Al respecto, como ya lo estableció el Tribunal en esta Sentencia, dichas sanciones son contrarias a la Convención, ya que este período fijo, luego del cual podría solicitarse la excarcelación, no toma en cuenta las circunstancias de cada niño; las cuales se van actualizando con el transcurso del tiempo y, en cualquier momento, podrían demostrar un progreso que posibilitaría su reintegración en la sociedad. En efecto, la cadena perpetua y las penas indefinidas, según prescribe la Convención, no proceden en casos de justicia juvenil. Además, las medidas privativas de la libertad impuestas deben estar sometidas a revisiones periódicas. Así, en caso de que las circunstancias personales del adolescente mejoren, y

desaparezcan las razones de la reclusión, es deber de los Estados otorgarles la libertad, aun cuando no hayan cumplido la sanción establecida en la sentencia (p. 60, párr. 296).

En la sentencia T-154 de 2017 en cuanto al deber de proteger y garantizar los derechos fundamentales de las personas que se encuentran en detención intramuros que:

Ante esta relación e interacción especial de sujeción entre los niños, niñas y adolescentes y el Estado, este último debe asumir una serie de responsabilidades particulares y tomar diversas acciones especiales para garantizar a los adolescentes privados de libertad las condiciones necesarias para desarrollar una vida digna y contribuir al goce efectivo de aquellos derechos que bajo ninguna circunstancia pueden restringirse, o de aquéllos cuya restricción no deriva necesariamente de la privación de libertad y que, por tanto, no es permisible. De no ser así, ello implicaría que la privación de libertad despoja a la persona de su titularidad respecto de todos los derechos humanos, lo que no es posible aceptar (M.S. ROJAS. A. p. 12, 13, párr. 46).

1.3 Reglas aplicables a la privación de libertad de niños, niñas y adolescentes

Se plasmarán a continuación los principales estándares internacionales aplicables a la materia como lo son: Directrices RIAD , Reglas De Beijing y Reglas de la Habana, las cuales contienen una serie de derechos y garantías reconocidos por el derecho internacional

de los Derechos Humanos sobre administración de justicia de menores. Más adelante, se enunciarán algunos de los aportes hechos por las Directrices de la RIAD, las cuales abordan el tema de la prevención de la delincuencia juvenil y otros instrumentos internacionales de carácter secundario.

1.3.1 Las reglas de Beijín

En cuanto a este tema PÉREZ (2014) reza lo siguiente:

La Resolución N° 4 del Sexto Congreso de las Naciones Unidas, sobre prevención del delito y tratamiento del delincuentes [que se celebró en Caracas (Venezuela) del 25 de agosto al 5 de septiembre de 1980] fue el instrumento que aprobó la elaboración de unas normas de justicia de menores, donde ya se especificó que dichas reglas debían reflejar el principio básico de que la prisión preventiva se utilizaría únicamente como último recurso, que no debía mantenerse a ningún niño o niña en una institución donde fuese vulnerable a la influencia negativa de los reclusos adultos y que debían tenerse siempre en cuenta las necesidades propias de su estado de desarrollo (p. 4).

La Asamblea General en las Reglas de Beijín estableció un uno de sus comentarios lo siguiente:

El procedimiento aplicable a los menores delincuentes deberá ceñirse a las Reglas mínimas que se aplican en casi todo el mundo a todo delincuente que disponga de defensa con arreglo al procedimiento penal conocido como “debido proceso legal”.

De conformidad con el debido proceso, en un “juicio imparcial y equitativo” deben darse garantías tales como la presunción de inocencia, la presentación y examen de testigos, la igualdad en materia de medios de defensa judicial, el derecho a no responder, el derecho a decir la última palabra en la vista, el derecho de apelación, etcétera. Acerca de la interpretación sistemática de dicho instrumento, respecto de los demás tratados internacionales la regla 9 señala que esta:

Tiene por objeto evitar todo equívoco en lo tocante a la interpretación y aplicación de las presentes Reglas en consonancia con los principios contenidos en los instrumentos y normas internacionales pertinentes vigentes o en desarrollo- relativos a los derechos humanos, como la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración de los Derechos del Niño y el proyecto de Convención sobre los Derechos del Niño. Conviene precisar que la aplicación de las presentes Reglas es sin perjuicio del cumplimiento de cualesquiera instrumentos internacionales que contengan disposiciones de aplicación más amplia. Estas reglas parten de la idea de que “la juventud, por constituir una etapa inicial del desarrollo humano, requiere particular atención y asistencia para su desarrollo físico, mental y social y necesita protección jurídica en condiciones de paz, libertad dignidad y seguridad” (1985, p .1.).

1.3.2. Reglas de la Habana

En cuanto a lo atinente al tema Montero (2011) establece lo siguiente:

Las Reglas de La Habana fueron adoptadas por la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU) en su Resolución 45/113, de 14 de diciembre de 1990. Si bien en las Reglas de Riad se había puesto el énfasis en la prevención del delito, el objetivo de las de La Habana se centró en establecer unas normas mínimas aceptadas por la ONU para la protección de los menores privados de libertad en todas sus formas, compatibles con los Derechos Humanos y las libertades fundamentales, con miras a contrarrestar los efectos perjudiciales de todo tipo de detención y fomentar la integración en la sociedad (p. 127).

En cuanto a las Reglas de la Habana PÉREZ (2014) reza lo siguiente:

El contenido de estas Reglas vino a desarrollar y completar las recomendaciones que se adoptaron en las de Beijing, en relación con los menores privados de libertad; entendiendo, en todo caso, que el encarcelamiento es el último recurso al que se debe recurrir, por el período mínimo necesario y limitándolo a casos excepcionales; y que debe presumirse que los menores detenidos bajo arresto o en espera de juicio son inocentes y deberán ser tratados como tales (p. 13).

Al respecto, Ramírez (2011, p. 119) señala lo siguiente:

Las Directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil; parten de una sencilla premisa: si los jóvenes se dedican a actividades lícitas y socialmente útiles, se orientan hacia la sociedad y enfocan la vida con criterio humanista, pueden adquirir actitudes *no criminógens*; es decir, prevenir esta delincuencia es esencial para anticiparse a la comisión de un delito con eficacia, de

ahí que sea necesario que toda la sociedad procure un desarrollo armonioso de los adolescentes, respetando y fomentando su personalidad a partir de la primera infancia (entendiendo que los jóvenes deben desempeñar una función activa y participativa en la sociedad y no ser considerados como meros objetos de socialización o control; y que calificarlos como “extraviados”, “delincuentes” o “predelincuentes” contribuye a menudo a que desarrollen pautas permanentes de comportamiento indeseable).

Este documento reconoce a los jóvenes como sujetos que debían desempeñar una función activa y participativa en la sociedad y no como objetos de socialización y control.

1.3.3 Reglas de Tokio

Establece Pérez (2013) que:

Tras aprobarse la Convención sobre los Derechos del Niño, a finales de 1990, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó además de las Directrices de Riad y las Reglas de La Habana, otras reglas de carácter más genérico (las Reglas de Tokio), las cuales son las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de la libertad (Adoptadas mediante Resolución M 45/110) (p. 1).

A diferencia de las dos anteriores, no se referían específicamente a los menores sino –de forma genérica– a todas aquellas personas sometidas a una acusación, un juicio o el cumplimiento de una sentencia (en cualquier fase de la administración de la justicia penal) a quienes se les aplicarán estas medidas sustitutivas del ingreso en

prisión. Como es habitual en las disposiciones de la ONU, estas nuevas Reglas incluyeron una serie de principios básicos con el objetivo de lograr una mayor participación de la comunidad en la gestión de la justicia penal (especialmente, en lo que respecta al tratamiento del delincuente) para fomentar en ellos un sentido de la responsabilidad hacia la sociedad; con el fin de alcanzar un adecuado equilibrio entre los derechos de los delincuentes, los de las víctimas y el interés de la sociedad por conseguir la seguridad pública y la prevención del delito (Pérez, 2013, p. 1)

El Observatorio del Bienestar de la Niñez (2015) dice que:

En las reglas de Tokio se establecen principios básicos, el alcance de las medidas no privativas de la libertad y lo concerniente a las salvaguardias legales, para asegurar que las penas no privativas sean aplicadas con imparcialidad dentro de un sistema legal claro que asegure la protección de los derechos del infractor y el recurso a un sistema de queja formal cuando sientan que en algún momento sus derechos hayan sido vulnerados. También, consagran medidas relacionadas con la investigación, planificación, formulación y evaluación de las políticas, entre otras materias (p. 11).

Con el surgimiento del principio del Interés Superior del Niño, sobre el cual gravita la Convención de los Derechos del Niño, emerge también el paradigma de protección integral, según el cual las personas menores de 18 años, son sujetos de derechos, empero con capacidad para enfrentar responsabilidades. En ese orden, los adolescentes inmersos en el sistema judicial, como consecuencia de la infracción a la ley penal, pueden en

algunos casos ser sancionados con privación de la libertad, para tal efecto, existe un corpus iuris internacional, mencionados *ut supra*, que garantiza la restricción de la misma solo en casos excepcionales y por el menor tiempo posible. Las normas internacionales establecen parámetros más rigurosos para la aplicación de esta sanción aflictiva de la libertad, en tratándose de adolescentes, instando a los estados para que esta medida cumpla las características diferenciales, específicas y pedagógicas.

CAPÍTULO 2

LA PRIVACIÓN DE LIBERTAD DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN COLOMBIA

Este capítulo aborda brevemente algunos de los antecedentes del Sistema de Responsabilidad Penal de Adolescentes y explica las diferencias entre el modelo tutelar anterior en contraste con el actual esquema de protección integral, de cara al tema de la privación de la libertad de niños, niñas y adolescentes en Colombia. Más adelante, se explican los cambios propiciados por el Código de Infancia y Adolescencia, el cual intentó adaptar el ordenamiento jurídico colombiano a las exigencias que la CDN Convención de los Derechos del Niño con respecto al tratamiento de los niños, niñas y adolescentes, en varios ámbitos, especialmente en el Sistema de Responsabilidad Penal. Por último, se acude a la Ley 1098 de 2006, para revisar lo consagrado en esta normatividad sobre la privación de la libertad de niños, niñas y adolescentes, desde las siguientes pautas: la privación de la libertad como último recurso, como medida pedagógica, por el menor tiempo posible y en establecimientos separados de los adultos.

Para iniciar es preciso aclarar que la mirada del Estado frente a los niños y niñas ha cambiado radicalmente. Caro (2015, p. 156) establece al respecto lo siguiente:

La concepción que las sociedades tienen de los niños, niñas y adolescentes ha cambiado durante los últimos siglos, en función de doctrinas implantadas socioculturalmente. Antes del Siglo XVIII no existía la noción de la minoría de

edad. Esto cambiará a comienzos de del siglo XIX cuando surge la noción de inimputabilidad para las personas menores de siete años y, se modificará otra vez a mediados de este mismo siglo con las tesis del discernimiento (imputabilidad) para personas entre los 7 y los 17 años de edad.

2.1 La privación de la libertad antes del siglo XX

En punto de la imposición de la medida privativa de la libertad, es pertinente recordar que en nuestro país, durante muchos años, los niños, niñas y adolescentes “infractores de la ley penal no recibían un tratamiento especial ni diferente al de los adultos por lo que, en consecuencia, eran llevados a los mismos establecimientos de encierro” (Holguín, 2010 p. 300).

Las primeras correccionales empezaron a funcionar en Medellín, Ibagué y Bogotá. En los años 30 la capital del país contaba con dos correccionales: una para niños llamada reformatorio La Fagua o Casa Paipa, y otra para niñas conocida como el Buen Pastor” (Coord. Maldonado, 2015, p. 16). Sin embargo, estos lugares eran insuficientes tanto en su capacidad como en su eficacia, pues allí, quienes estaban reclusos, “pasaban el día en completa ociosidad y en hacinamiento” (Holguín-Galvis, 2010, p. 16).

Esto contemplaba, según Holguín – Galvis (2010, p. 16) que los lugares se llamaron reformatorios pues tenían la finalidad de reformar y encauzar la conducta de los niños y niñas encerrados, el castigo, ya que, como afirma la autora, en este momento estaba vigente la teoría foucaultiana de que castigando se disciplina; es decir se encauza una conducta para

que se convierta en buena. Por ende, el arte de castigar no tiende a la expiación ni aun exactamente a la represión, sino a la corrección y al buen encauzamiento. Más adelante, sin embargo, se dio una modificación de filosofía en la tendencia de estos centros ya que, con la promulgación de la Ley 83 de 1946 se empezó a tomar conciencia de la posición a veces injusta de los niños y niñas en la sociedad (Foucault 2014, Holguín 2010 p. 17)

2.2 El código del menor

En cuanto a la sanción de los niños, niñas y adolescentes infractores de la ley penal en un Estado Social y Democrático de Derecho, Parra (2015) esboza que:

El decreto 2737 de 1989 o Código del Menor, en su Parte Primera, Título I, artículo 30 establece las circunstancias en que un menor se halla en situación irregular y entre ellas el numeral 4° establece: Haya sido autor o partícipe de una infracción penal. El artículo 194 y 204 de este código, dispone expresamente las medidas que se aplican a quienes eran llamados menores infractores de la ley penal las cuales eran:

- La amonestación al menor, y a las personas de quien dependa.
- Imposición de reglas de conducta.
- Libertad asistida.
- Ubicación institucional.
- Cualquiera otra medida que contribuya a la rehabilitación del menor (p. 7, 8).

En el artículo 208 de este estatuto se hacía referencia a la ubicación institucional cuando no fuera necesaria la aplicación de otra medida que refería el artículo 204; igualmente estaba el artículo 209 que establecía la ubicación del menor en una institución de carácter cerrado cuando se dieran las siguientes circunstancias:

- Cuando se trate de una infracción a la Ley penal, cometida mediante grave amenaza o violencia a las personas.
- Por reiterada comisión de infracciones penales.
- Por incumplimiento injustificado de la medida anteriormente impuesta.

En el párrafo de esta disposición se señalaba la creación de estas instituciones por parte del Estado y la apropiación presupuestal por parte del ICBF para atender su funcionamiento. Lo cierto es que las instituciones no contaron con el presupuesto necesario para el cumplimiento de la ley, por lo que las infracciones graves de los menores no se cumplían, haciéndose necesario remitir estos menores a sus familias en cumplimiento de la sanción que les imponía el Juez.

Siguiendo con el análisis de los fundamentos del Código del menor, Coord. Maldonado, (s.f. p. 12) esboza lo siguiente:

En Colombia, el Decreto 2737 de 1989 o Código del Menor es, desde su origen, un sistema contradictorio, pues se ubica entre los dos modelos que han marcado la pauta en el tratamiento jurídico de personas menores de edad en Latinoamérica: el de la situación irregular y el de la protección integral. Por un lado, se preocupa por

crear unas dependencias (comisarías de familia, por ejemplo) que garanticen la protección de la “familia como núcleo fundamental de la sociedad” pero por otro sigue aludiendo a los conceptos de “menores” y de “situación irregular”. Este último concepto es definido juiciosamente por el mencionado código y engloba una serie de escenarios en los que pudieran estar los niños, niñas y adolescentes tales como: estar en situación de abandono o peligro, carecer de atención, participar en una infracción penal, ser adicto a sustancias psicoactivas, entre otras (Decreto 2737 de 1989, art. 307). Si un adolescente se encontraba en cualquiera de estas “situaciones” era inmediatamente catalogado como “menor” y se volvía objeto del sistema penal, pues entre sus objetivos principales, estaban la prevención y la corrección de las situaciones irregulares y el establecimiento de medidas para proteger o sacar a los “menores” de las mismas. Esto promovía la criminalización de la pobreza, del abandono, de la desescolarización y de cualquier otra condición que pudiera entrar entenderse como “situación irregular”, pues el sistema tenía la potestad de privar de la libertad a todas las personas menores de edad que se encontraran en ellas, independientemente de si éstas habían cometido o no algún delito.

Por su parte, Castellón (2012, p. 71.) en la Serie Documentos de Investigación en Derecho No. 14. La Privación De La Libertad En El Sistema De Responsabilidad Penal Para Adolescentes En Colombia, señala lo siguiente, respecto a la forma como operaba el Código del menor:

Bajo el imperio del Código Menor eran considerados inimputables y solo podían cometer conductas típicas y antijurídicas, pero no culpables, por lo cual no se les podían asignar castigos sino medidas de protección, ya que se les desconocía la capacidad para conocer el injusto y la posibilidad de actuar de otra manera; así las cosas, esa condición de inimputables, que en su momento parecía beneficiosa, resultó en la violación del derecho de defensa y por ende del debido proceso de los menores de edad, ante la imposibilidad de invocar circunstancias que podrían haberlos liberado de cualquier respuesta ante el delito, como las atinentes a errores de prohibición. Ciertamente el tema de la inimputabilidad por minoría de edad fue un aspecto discutido durante siglos, que dio pie para la impunidad del delito del menor, ocasionando movimientos abolicionistas y salvadores.

Este modelo, fue fuertemente criticado e, incluso, la Corte IDH en su Opinión Consultiva OC-17 de 2002, lo tildó de “inadmisibles” pues penalizaba a un gran número de personas menores de edad, al ubicar en un mismo grupo a todas aquéllas que se encontraran en situación de riesgo o peligro, por desvalimiento, abandono, miseria o enfermedad a aquellas que se apartaran de los patrones de conducta generalmente aceptados [o aquellas que] presentan conflictos de adaptación al medio familiar, escolar o social” (OC-17 de 2002, párr. 110).

El paradigma que derrumbaría esta doctrina se llamó de la protección integral y, por el contrario del anterior, parte de la idea de que niños y niñas son sujetos de derecho que requieren protección del Estado independientemente de su situación (...) y tienen la

capacidad de tomar decisiones y de ser responsables de sus actos. Bajo este enfoque, que sería el adoptado por el código de infancia y adolescencia, el Estado, la sociedad y la familia están “llamados a garantizar la satisfacción integral y simultánea de todos sus derechos” (Ley 1098 de 2006, art. 8, citado en Jiménez y Chaparro, 2018).

2.3 Código de la Infancia y la Adolescencia

Junto al paradigma de protección integral, la CDN cambió radicalmente la manera en la que se conciben los niños, niñas y adolescentes en todo el mundo. En Colombia, por ejemplo, ésta “produjo una profunda crisis al sistema de justicia penal, que conllevó a diferentes reformas penales” (Coord. Maldonado, 2015, p. 21). Una de las más importantes ha sido la implementación del Código de la Infancia y la Adolescencia, mediante el cual se pretendía incluir en la legislación respectiva a personas menores de edad las exigencias de la CDN, “que establece la forma en la que deben ser tratados y atendidos todos los niños y las niñas del mundo en los diferentes ámbitos de su vida, a partir de su reconocimiento como sujetos de derechos” (Unicef -Colombia: 2007, citado en Coord. Maldonado, 2015, p. 21). Esta convención fue aprobada en nuestro país mediante la Ley 12 de 1991.

El Código de la Infancia y la Adolescencia dio un vuelco al sistema anteriormente imperante pues, a diferencia del Código del menor y de su adscripción a la doctrina tutelar, esta ley recoge “los fundamentos de una doctrina que durante muchos años fue elaborada por los organismos internacionales encargados de velar por los derechos de los niños” (Coord. Maldonado, 2015, p. 21).

Puede decirse que este sí es un sistema concordante con la doctrina de la protección integral ya que busca garantizar la protección de los niños, niñas y adolescentes, el ejercicio de sus derechos y libertades, respetando lo pactado en los “instrumentos internacionales de Derechos Humanos, en la Constitución Política y en las leyes” (Congreso de Colombia, 2006, Art. 2).

Una de las innovaciones que trajo el Código de Infancia y Adolescencia es que ya no se presume la inimputabilidad de los niños, niñas y adolescentes, concepto que se encuentra definido de la siguiente manera en el artículo 33 del Código Penal Colombiano:

(...) es inimputable quien en el momento de ejecutar la conducta típica y antijurídica no tuviere la capacidad de comprender su ilicitud o determinarse de acuerdo con esa comprensión, por inmadurez psicológica, trastorno mental, diversidad sociocultural o estados similares. No será inimputable el agente que hubiere pre-ordenado su trastorno mental. Los menores de dieciocho (18) años estarán sometidos al Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil (...).

Así las cosas los jóvenes son titulares de derechos, pero también deben considerarse como responsables penalmente, (siempre y cuando sean mayores de 14 años) aunque se trata de una responsabilidad disminuida, dadas su condición etaria, debilidad e inferioridad, ello explica que estén sometidos a un sistema especial, que gravita alrededor del principio del Interés Superior del Niño de raigambre constitucional, consagrado en el artículo 44 de la Carta Magna.

2.4 La privación de la libertad en el código de infancia y adolescencia

De acuerdo a lo establecido por la Secretaria de Planeación de Bogotá (2015) el código de infancia y adolescencia se encuentra:

Inspirado en el paradigma de la protección integral, el cual emana de la Convención de los Derechos del Niño y de las directrices de las Naciones Unidas. A partir de dicho paradigma se busca diseñar políticas públicas integrales, que no solo propendan por la corrección del niño dentro de un ámbito legal, donde son considerados responsables, sino también la restitución de sus derechos por medio de sanciones de contenido pedagógico y en cuanto a que en el articulado no se hace referencia al concepto de imputabilidad o inimputabilidad y más bien define al niño, niña y adolescente que incurre en dicha conducta como responsables penales, es decir que la propia ley toma partido por la responsabilidad penal con todas las garantías y con sanciones distintas a las de los adultos, en un proceso pedagógico, especializado y diferenciado. (p. 26, 37).

2.5 Condiciones para la privación de la libertad de niños, niñas y adolescentes

Para finalizar el capítulo, se estudiará lo estipulado en el Código de Infancia y Adolescencia con respecto a unas de las pautas más relevantes de protección de los N.N.A. respecto de la sanción privativa de la libertad; estas son: la Privación de la libertad como último recurso, por el menor tiempo posible, en establecimientos separados de los adultos y como medida pedagógica.

La ley 1098 de 2006, en armonía con las Reglas de la Habana (Regla 11), define la privación de la libertad como: “toda forma de internamiento, en un establecimiento público o privado, ordenada por autoridad judicial, del que no se permite al adolescente salir por su propia voluntad” (art. 160). Y define su carácter excepcional al subrayar que “se aplique solo a los y las adolescentes mayores de dieciséis (16) y menores de dieciocho años (18) que sean hallados responsables de la comisión de delitos, cuya pena mínima establecida en el Código Penal sea o exceda de seis años de prisión” (Congreso de Colombia, 2006, Art. 187).

2.6 La privación de libertad debe hacerse en lugares distintos a los de los adultos

Una de las reglas principales aplicables tanto en la detención preventiva como en la sanción posterior a la sentencia es la inadmisibilidad de la privación de la libertad de personas menores de edad en establecimientos de adultos, esta ley estipula que solo se cumplirá en “establecimientos de atención especializada en programas del Sistema Nacional de Bienestar Familiar” y, dado el caso de que no existan éstos, el funcionario judicial deberá otorgarle al niños, niñas y adolescentes que haya cometido el ilícito “la libertad provisional o la detención domiciliaria” (art. 162). Esto último responde a las recomendaciones de varios instrumentos internacionales (Reglas de la Habana (Regla 29) y en las Reglas de Beijing (Parágrafo 3 de la Regla 26)) y de la Corte IDH establece en diversos fallos que para garantizar el derecho a la integridad personal de los niños, niñas y adolescentes privados de la libertad es indispensable que sean separados de los adultos, en

consideración de su edad, naturaleza de la infracción cometida y el estado del proceso judicial en su contra.

A este respecto, el Comité de los Derechos del Niño de la ONU en la observación general No. 10 (2007), indicó que:

todo niño privado de libertad estará separado de los adultos. No se privará a un menor de libertad en una prisión u otro centro de adultos. Hay muchas pruebas de que el internamiento de niños en prisiones u otros centro de detención de adultos pone en peligro tanto su seguridad básica y bienestar como su capacidad futura de no reincidencia y de reintegración social. En dicho documento se advierte además que la excepción contemplada en el párrafo c) del artículo 37 de la Convención, en el sentido de que la separación deberá efectuarse "a menos que ello se considere contrario al interés superior del niño", debe interpretarse de manera restrictiva; la alusión al interés superior del niño no se refiere a lo que sea conveniente para los Estados Partes. Éstos deberán crear centros separados para los menores privados de libertad, dotados de personal especializado y en los que se apliquen políticas y prácticas especiales en favor de los menores (p. 24).

2.7. La privación de libertad como última ratio

Con respecto a que la privación de la libertad debe establecerse solo como último recurso y por el menor tiempo posible, debe decirse que estos son criterios comunes a la CDN (Artículo 37), a las Reglas de la Habana (Regla 2) y a las reglas de Beijing (Parágrafo

1 de la Regla 19). Expresamente las Reglas de Beijing en la Consideración No.17 establecen que la reacción por parte de las autoridades a la comisión de un delito por parte de un adolescente, debe ser siempre proporcionada no solo de acuerdo a la gravedad del mismo, sino también a la necesidad del joven y de la sociedad. Agrega que la privación de la libertad de aquellos, debe estar precedida por un análisis exhaustivo y ponderado, reduciendo al mínimo posible su aplicación. En la Consideración No. 18, se encuentra un catálogo de sanciones no privativas de la libertad, que permiten al fallador seleccionar con cierta flexibilidad la que más se ajuste al caso concreto, teniendo en cuenta la gravedad del delito, las condiciones personales del adolescente, proporcionándole alternativas diferentes a la limitación de la libertad.

A cerca del carácter mínimo de la restricción a la libertad, el SRPA acata lo normado en el Artículo 3 de la CDN, el cual propone que “la aplicación de consecuencias penales para un adolescente debe reducirse al mínimo posible”. Dicho principio busca la descriminalización legal a partir de “la utilización de la privación de la libertad como último recurso, y por supuesto, de la existencia efectiva de un conjunto de estrategias de orden pedagógico, educativo, social, cultural, ocupacional y restaurativo que garanticen todos los derechos humanos de los adolescentes durante la ejecución de las sanciones” (ICBF, 2017, p. 90). Esto responde a lo planteado en la Ley 1098 de 2006, cuando en su artículo 178 estipula que “las sanciones tienen una finalidad protectora, educativa y restaurativa, y se aplicarán con el apoyo de la familia y de especialistas” (p. 13).

2.8 La privación de libertad como medida pedagógica

El Código de Infancia y Adolescencia establece que las sanciones deben ser pedagógicas para así estar acorde con los estándares internacionales teniendo en cuenta que los niños, niñas y adolescentes se encuentran en proceso de formación, por lo tanto el Estado debe crear mecanismos que sean destinados a garantizar los derechos de manera integral de esta población.

La tarea, entonces, del SRPA es, más allá de sancionar a los niños, niñas adolescentes para posibilitar la inclusión social de los mismos que por razones como, la desintegración familiar, la adicción a psicoactivos, la expulsión temprana del sistema educativo, entre otras, se han visto involucrados en la comisión de delitos. Es por esta razón que el sistema busca potenciar su desarrollo y re-significar el sentido de sus proyectos de vida, para que al final “sientan que cuentan con los recursos educativos, culturales, espirituales y ocupacionales que les permitan ser y sentirse parte de una sociedad, de una comunidad y de una familia más humana e incluyente” (ICBF, 2017 p. 94).

2.6 Privación de la libertad de carácter preventivo

En el artículo 181 del CIA se encuentra establecido el internamiento preventivo en los siguientes términos:

En cualquier momento del proceso y antes de la audiencia de juicio, el juez de control de garantías, como último recurso, podrá decretar la detención preventiva. Se ejecutará en centros de internamiento especializados donde los adolescentes procesados deben estar separados de los ya sentenciados.

Los Centros de Atención Especializada (CAE) son aquellos lugares en los que:

Por orden judicial, se ubica a los adolescentes declarados responsables de la comisión de uno o varios delitos, a quienes se les ha impuesto una sanción privativa de la libertad. A diferencia de lo que ocurre en el sistema de adultos, la permanencia en el CAE pretende que el adolescente cuente con los suficientes e idóneos espacios de intervención para él y la inclusión que en su proceso se hace a la familia, teniendo como meta la reflexión frente al daño que se ha ocasionado con el delito y evitar así la reincidencia. (Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, hacia la Protección Integral y la Justicia Restaurativa, Ministerio de Justicia, 2015, p. 131).

Los CAE prestarán una atención pedagógica, específica y diferenciada entre los adolescentes menores de dieciocho años de edad y aquellos que alcanzaron su mayoría de edad y deben continuar con el cumplimiento de la sanción. Esta atención deberá incluir su separación física al interior del Centro, así como las demás garantías contenidas en la Constitución Política y en los Tratados o Convenios Internacionales de Derechos Humanos ratificados por Colombia, en especial, la CDN.

Acatando los estándares internacionales sobre la materia, el Código de Infancia y Adolescencia ha incluido los siguientes derechos a los jóvenes detenidos preventivamente:

- Permanecer internado en la misma localidad, municipio o distrito o en la más próxima al domicilio de sus padres, representantes o responsables.
- Que el lugar de internamiento satisfaga las exigencias de higiene, seguridad y salubridad, cuente con acceso a los servicios públicos esenciales y sea adecuado para lograr su formación integral.

- Ser examinado por un médico inmediatamente después de su ingreso al programa de atención especializada, con el objeto de comprobar anteriores vulneraciones a su integridad personal y verificar el estado físico o mental que requiera tratamiento.
- Continuar su proceso educativo de acuerdo con su edad y grado académico.
- Que se le mantenga en cualquier caso separado de los adultos
- Derecho a participar en la elaboración del plan individual para la ejecución de la sanción.
- Derecho a recibir información sobre el régimen interno de la institución, especialmente sobre las sanciones disciplinarias que puedan serle aplicables y sobre los procedimientos para imponerlas y ejecutarlas
- No ser trasladado arbitrariamente del programa donde cumple la sanción. El traslado sólo podrá realizarse por una orden escrita de la autoridad judicial.
- No ser sometido a ningún tipo de aislamiento.
- Mantener correspondencia y comunicación con sus familiares y amigos, y recibir visitas por lo menos una vez a la semana.
- Tener acceso a la información de los medios de comunicación (Congreso de Colombia, 2006, Art. 188, p.1).

En el código de infancia y adolescencia no se preceptuaron medidas alternativas a la detención preventiva, como si se hizo en el caso de la privación de la libertad como sanción, este vacío normativo conduce a que en caso de aprehensión de un adolescente la única medida es la detención preventiva o la libertad, lo que prima facie contravendría lo preceptuado en las Reglas de Beijing.

La Organización de Naciones Unidas (ONU) en la Observación General N° 10 (2007) sostiene al respecto que la adopción de las mencionadas alternativas deberá estructurarse cuidadosamente para reducir también el recurso a la prisión preventiva, y no "ampliar la red" de niños, niñas y adolescentes condenados. Además, los Estados Partes deberán adoptar las medidas legislativas y de otro tipo que sean necesarias para limitar la utilización de la prisión preventiva.

Según CASTRILLON (2012) “Es imperioso entonces el establecimiento de otras medidas de aseguramiento en el SRPA, no en calidad de sustitutivas de la detención preventiva, que en el caso de los adolescentes es extrema, excepcional y el último recurso, sino alternativas, para preponderar las necesidades de éste en el contexto del proceso penal, acorde con toda la filosofía del CIA y los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos” (p. 110).

2.7 Privación de la libertad como sanción

Dentro de las sanciones establecidas en la ley 1098 de 2006, se encuentra la privación de la libertad, en el artículo 87 modificado por el artículo 90 de la Ley 1453 de 2011, el cual reza:

La privación de la libertad en centro de atención especializada se aplicará a los adolescentes mayores de dieciséis (16) y menores de dieciocho años (18) que sean hallados responsables de la comisión de delitos cuya pena mínima establecida en el Código Penal sea o exceda de seis años de prisión (ley 1098 de 2016, artículo 87, p. 1).

En estos casos la privación de libertad en centro de atención especializada tendrá una duración desde un (1) año hasta cinco (5) años. La privación de libertad en Centro de Atención Especializada se aplicará a los adolescentes mayores de catorce (14) y menores de dieciocho (18) años, que sean hallados responsables de homicidio

doloso, secuestro, extorsión en todas sus formas y delitos agravados contra la libertad, integridad y formación sexual.

Es pertinente señalar que se aplican los mismos estándares que a los adolescentes bajo la medida detención preventiva. Bajo el principio del Interés Superior del Niño los funcionarios deben privilegiar los derechos de los adolescentes, evitando que so pretexto de proteger a los que se encuentren en estado de vulnerabilidad (por pobreza, abandono, desescolarización) se termine restringiendo la libertad como ocurría en el sistema tutelar. Cillero Bruñol (s.f.) siguiendo el Artículo 3 de la CDN ha sostenido que “(...) la aplicación de consecuencias penales para un adolescente debe reducirse al mínimo posible, con lo que se perfila el elemento que hace singular al Sistema de Responsabilidad Penal de Adolescentes: su carácter mínimo”.

De lo expuesto previamente se concluye, que la concepción que las sociedades tienen de los niños, niñas y adolescentes ha cambiado durante los últimos siglos, en función de doctrinas implantadas socioculturalmente, desde el esquema judicial que no diferenciaba entre los adultos y los menores de edad, que eran recluidos en los mismo lugares, sin otorgar medidas protectoras, ni diferenciadas a aquellos que por su situación de mayor vulnerabilidad ameritaban un trato preferente, pasando por el modelo tutelar o de “situación irregular “ donde el juez de menores ordenaba el internamiento de los N.N.A. bajo el argumento de la protección del “ menor ”, El Código del Menor, artículo 208, estipuló:

La ubicación institucional será decretada por el Juez cuando no sea recomendable aplicar alguna de las otras medidas a que se refiere el artículo 204, por las características de la personalidad del menor y su medio familiar, la naturaleza de la infracción y las circunstancias en que se cometió. Esta medida se cumplirá en una institución pública o privada, con régimen abierto, semicerrado o cerrado, según el caso.

Según el Decreto 2737 de 1989, art. 307 si el denominado “ menor “, ostentaba una “ situación irregular “, tales como la desescolarización, abandono, drogadicción, alcoholismo, era sujeto de una medida de protección , en el entendido de que el objetivo de la misma era la prevención, enmendar las situaciones irregulares y restablecer los derechos del niño.

Al imponer una medida de protección, como lo es la de ubicación institucional en un establecimiento público o privado, era una forma eufemística de criminalizar la pobreza. Ubicar en un mismo lugar a menores de 18 años en conflicto con la ley penal y aquellos que por sus condiciones familiares, sociales, personales, económicas, y escolares presentaran mayor desvalimiento y vulnerabilidad, atenta contra los derechos humanos de los N.N.A.

El Código de la Infancia y la Adolescencia dio un vuelco al sistema anteriormente imperante pues, a diferencia del Código del menor y de su adscripción a la doctrina tutelar, esta ley recoge “los fundamentos de una doctrina que durante muchos años fue elaborada por los organismos internacionales encargados de velar por los derechos de los niños” (Coord. Maldonado, 2015, p. 21). Puede decirse que este sí es un sistema concordante con

la doctrina de la protección integral ya que busca garantizar la protección de los niños, niñas y adolescentes, el ejercicio de sus derechos y libertades, respetando lo pactado en los “instrumentos internacionales de Derechos Humanos, en la Constitución Política y en las leyes” (Congreso de Colombia, 2006, Art. 2).

En atención a los compromisos internacionales adquiridos por el Estado, especialmente en lo ordenado en el artículo 4 de la Convención de los Derechos del Niño, según el cual los estados deben adoptar todas las medidas administrativas y legislativas destinados a garantizar el Interés Superior del Niño, se estableció El Sistema de Responsabilidad Penal Para Adolescentes, el cual se encuentra consagrado en el libro segundo de la ley 1098 de 2006. Dicho sistema se erigió sobre el principio de la protección integral, en tanto y en cuanto se trata de un proceso de carácter pedagógico, específico y diferenciado, de acuerdo conformidad con lo preceptuado en el artículo 140 de dicha normatividad.

En artículo 187 del CIA la privación de la libertad de los adolescentes, procede solo para adolescentes que se encuentren entre los 16 y 18 años de edad, por la comisión de delitos cuya pena en la ley 599 de 2000 sea igual o superior a 6 años y adolescentes mayores de catorce (14) y menores de dieciocho (18) años que sean hallados responsables de homicidio doloso, secuestro o extorsión, en todas sus modalidades, la privación de la libertad en centro de atención especializada tendrá una duración de dos (2) hasta ocho (8) años.

La medida se aplica como último recurso, por el menor tiempo posible y por supuesto, de la mano de un efectivo plan, con estrategias de orden formativo, social, cultural,

ocupacional y restaurativo que respalden y garanticen la prevalencia de todos los derechos de los menores infractores durante (y después de) la ejecución de las sanciones.

Por lo expuesto en este capítulo, se puede predicar que la privación de la libertad de adolescentes en nuestro modelo de responsabilidad penal juvenil, a nivel normativo, se encuentra en consonancia con los parámetros regulados en la Constitución Nacional de 1991, Convención de los Derechos del Niño, Reglas de Beijing, Reglas de la RIAD, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y Convención Americana de los Derechos humanos.

CAPÍTULO 3

LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN COLOMBIA COMO ÚLTIMO RECURSO, POR EL MENOR TIEMPO POSIBLE, EN ESTABLECIMIENTOS SEPARADOS DE LOS ADULTOS Y COMO SANCION PEDAGOGICA

Entre la multiplicidad de reglas que rigen la privación de libertad de los adolescentes infractores (elaboradas a fin de blindar a estas personas contra la vulneración de sus derechos), sobresalen cuatro de especial trascendencia, que fueron priorizado para desarrollarse en el presente trabajo y por ello es de suma importancia revisar su aplicación en Colombia. Para hacerlo, se tuvieron en cuenta informes de monitoreo, estudios sobre el SRPA, seguimientos y opiniones consultivas, entre otros documentos.

3.1. Relevancia de los estándares internacionales en los sistemas nacionales de responsabilidad penal juvenil

Como se abordó en la primera parte de este texto, a nivel internacional existen una variedad de estamentos encargados de la protección y garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, en particular de aquellos que han cometido delitos, iniciando con la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (mayo 1948). Estos

instrumentos derivan en el establecimiento de unos mínimos éticos que las sociedades y los Estados deben cumplir a los individuos de una determinada jurisdicción.

Todos los instrumentos que desarrollen estos hitos deben ser inmediatamente acatados por el Estado, ya que la interpretación facultativa de tales aspectos (de gran trascendencia en lo que a derechos humanos respecta), constituye un enorme riesgo ya que eventualmente, podría presentarse una regresión en los estándares internacionales, fruto de las luchas de minorías, otrora consideradas personas de menor categoría.

Para evitar lo anterior, existen dos principios, desarrollados y reconocidos en la Convención Americana de Derechos Humanos y el Protocolo de San Salvador e incorporados en el derecho constitucional interno de algunos Estados: El Principio de No Regresividad y de Progresividad:

Estos principios propenden por garantizar, no solo la permanencia de los derechos humanos, sino también su evolución, bajo el entendido de que los derechos humanos no son estáticos sino en continua transformación. De igual manera el artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, especialmente sus incisos a) y b), establece la imposibilidad de limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que esté reconocido. El principio de progresividad tiene sustento en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, ya que este contempla la obligación de los Estados Partes de lograr el desarrollo progresivo de los derechos económicos, sociales y culturales, por otro lado la obligación de no regresividad consistente en la prohibición de adoptar políticas y medidas, y de

sancionar leyes que empeoren la situación de los derechos de los que gozaba la población al momento de adopción del tratado o en cada mejora progresiva; y por otro lado, la prohibición de reducir los niveles de protección de los derechos vigentes o derogar los ya existentes (Calvo, 2014, p. 4, 11).

En este mismo sentido, el sistema interamericano de protección de derechos (SIDH) que cuyo instrumento fundamental es la CADH, ha desarrollado a través de la Corte IDH, un conjunto de estándares mínimos a través de sus opiniones consultivas y casos contenciosos, que los Estados partes del SIDH y que han aceptado la competencia contenciosa de la Corte, tienen el deber de asumir, adoptando las medidas especiales de protección y asistencia, en favor de los niños bajo su jurisdicción (Nogueira, 2015, p. 10).

Así, estándares internacionales en materia de infancia y adolescencia deben ser acatados por los estados partes con el objeto de garantizar que los sistemas de justicia aplicables a los niños, niñas y adolescentes que han cometido infracciones a la ley penal, respondan a los principios y deberes establecidos en los tratados internacionales de derechos humanos, para ello los estados deben adoptar disposiciones de derechos interno que garanticen que dichos sistemas respondan a los modelos internacionales para de esta manera fortalecer los esquemas mínimos.

Los Estados partes deben asegurar a sus habitantes en especial a los niños quienes poseen los derechos que corresponden a todos los seres humanos, teniendo además derechos especiales derivados de su condición, a los que corresponden deberes

específicos de la familia, la sociedad y el Estado, como asimismo a través de las medidas de reparación ha determinado las mejoras de sus ordenamientos jurídicos internos y las prácticas de sus autoridades y funcionarios, lo que ha contribuido a pasar de situaciones menos humanas a más humanas de calidad de vida y un mayor respeto de los derechos humanos (Nogueira, 2015, p. 31).

3.2. La privación de la libertad como último recurso y por el menor tiempo posible

Como se mencionó en el capítulo anterior, el Artículo 3 de la Convención CDN establece que “la aplicación de consecuencias penales para un adolescente debe reducirse al mínimo posible”.

No obstante lo anterior, la brevedad del plazo de privación de la libertad del joven infractor de la ley penal, es discrecional de los Estados partes. El peligro de dicha es discrecionalidad radica en que puede convertirse en una medida regresiva en materia de Derechos Humanos, conforme a lo analizado previamente.

En el caso colombiano, como se describió previamente, el párrafo del artículo 187 de la ley 1098 de 2006 o Código de la Infancia dictamina que la privación de la libertad en CAE se aplicará a los adolescentes mayores de 16 años y menores de 18 años y que no podrá durar más de cinco años, con algunas excepciones. Si bien comparando dicha disposición con lo establecido en el sistema penal de adultos se encuentra que el término máximo establecido en la norma (8 años) es mucho menor, es importante tener en cuenta

que en el caso de personas menores de edad, que se encuentran en proceso de desarrollo y aprendizaje, el ser privados de libertad por un periodo de tiempo tan largo, lejos de su familia y sus pares, puede resultar contrario al objetivo pedagógico y restaurativo del sistema. Además, en vez de prevenir la comisión de delitos puede terminar aumentando las posibilidades de que los adolescentes se involucren nuevamente en este tipo de conductas.

Sobre el particular, el lineamiento modelo de atención para adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley-SRPA del ICBF ha estipulado como uno de sus principios el carácter mínimo del SRPA, el cual busca la descriminalización legal a partir de “la utilización de la privación de la libertad como último recurso, y por supuesto, de la existencia efectiva de un conjunto de estrategias de orden pedagógico, educativo, social, cultural, ocupacional y restaurativo que garanticen todos los derechos humanos de los adolescentes durante la ejecución de las sanciones” (ICBF, 2017, p. 90). Esta regla se encuentra también en el artículo 19.1 de Beijing, que como se señaló en el capítulo 2, establece que “el confinamiento de menores en establecimientos penitenciarios se utilizará en todo momento como último recurso y por el más breve plazo posible”.

Realizando un análisis comparativo del estándar nacional con el internacional se encuentra que si bien el SRPA no es un sistema independiente y autónomo, ya que su procedimiento es el mismo al establecido para el sistema penal de adultos (ley 906 de 2000), lo cual ha sido muy criticado, lo cierto es que las penas que se pueden imponer son diversas “la aflicción es de baja intensidad en el SRPA y busca objetivos distintos”

(Martínez, s.f. p. 10). Lo cual resulta en consonancia con la CDN y los demás estándares internacionales analizados previamente.

Por otro lado, si en los procesos seguidos contra adultos la privación de la libertad se impone como último recurso, con mayor razón en los juicios de responsabilidad penal juvenil debe hacerse, pues ésta solo opera en delitos graves, como el homicidio doloso, delitos sexuales, el secuestro y la extorsión. Ya que las medidas o sanciones son de carácter educativo, no se sanciona con las mismas penas establecidas en el Código Penal, sino con medidas pedagógicas especiales consagradas en la Ley 1098 de 2006. Todo lo cual es acorde con los estándares internacionales previamente analizados.

No obstante, si se compara la posibilidad de redención de penas establecida en el sistema de adultos y el SRPA se encuentra que al no preverse dicha posibilidad en el SRPA se, podría estar en teoría vulnerando el derecho a la igualdad y al debido proceso, bajo el entendido de que a los adultos sí se les otorga tal garantía y a los adolescentes no. No obstante, el artículo 177 del CIA posibilita la sustitución de la medida privativa de la libertad, por otras no privativas, con lo cual parecería superarse este escollo y adecuarse la norma al estándar internacional.

Pese a que la normatividad es clara y brinda múltiples salidas a la privación de la libertad, en la práctica, esto parece no cumplirse a cabalidad. En el informe sobre el “Monitoreo de la Garantía de los Derechos de los Adolescentes y Jóvenes Privados de la Libertad en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes”, del Ministerio de Justicia y del Derecho (2017), se afirma que la medida de privación de la libertad es en

muchos casos la medida más empleada por los jueces. Al respecto, el Comité de evaluación del SRPA (2011) subraya que “un obstáculo severo para la aplicación del SRPA ha sido el imaginario de que el sistema se reduce a la privación de libertad de adolescentes que cometen no solo delitos graves, sino los de leve intensidad” (p. 7). Incluso, expone el mismo informe que el principal problema del sistema consiste en no disponer de suficientes centros de en los cuales se implementen otro tipo de medidas distintas a la privación de libertad, cuya solución sería ampliar los cupos de estos centros. Esta visión reduce al SRPA a un sistema punitivo cuya única misión es la de privar de la libertad a las personas menores de edad que hayan cometido delitos, sin tener en cuenta sus reales finalidades. “Esta tesis se confirma con la información brindada por las instituciones que reiteran permanentemente la urgencia de disponer de infraestructura y cupos para que los jueces puedan imponer la sanción de privación de libertad” (Ministerio de Justicia y del Derecho y OIM, 2017).

El informe señala que preferiblemente debe optarse por las sanciones definidas como alternativas a la privación de libertad (que deberá ser la última en aplicarse como lo ordena el artículo 40 de la Convención de los Derechos del Niño), por ejemplo: las reglas de conducta, la amonestación, la libertad vigilada, el trabajo con la comunidad e internación en medio semi-cerrado, con lo cual se garantizarían efectivamente en la práctica la implementación de los enfoques pedagógicos y restaurativos.

En un estudio realizado por Ríos-Peñuela (2018) titulado el sistema de responsabilidad penal de adolescentes en Colombia desde un análisis económico del

derecho, deduce que su naturaleza acusatoria y de última ratio reduce los costos sociales y de funcionamiento, pero, para elevar su eficiencia, es recomendable que las medidas de prestación de servicios a la comunidad no sean las de menor aplicación, sino, por el contrario, se impongan de forma preferente, con lo cual, se verían satisfechos los fines de la sanción, y se contribuye a la mejora de la sociedad afectada.

3.3 Poco uso del principio de oportunidad

La Ley de Infancia en el artículo 174 permite la aplicación del principio de oportunidad en los casos en que ello sea procedente, buscando acuerdos entre el o la adolescente y las víctimas, bien al inicio del proceso con la renuncia a la persecución penal, con la suspensión a pruebas, o en cualquier momento del mismo. Sin embargo, según afirma la Comisión de verificación, las autoridades judiciales prefieren aplicar el proceso penal para adolescentes de principio a fin, sin hacer uso de esta herramienta. Esta omisión no solamente va en contravía del principio de excepcionalidad de la privación de la libertad, sino que obstaculiza la finalidad pedagógica del SRPA, en el sentido de que el principio de oportunidad, por definición, es una herramienta pensada para que las personas, en este caso los y las adolescentes, logren hacer una reflexión pedagógica del delito y tomen consciencia de que no es necesario llegar hasta la sentencia para asegurar efectivamente la reparación del daño a la víctima (Castellón , 2012, p. 136).

De acuerdo a lo anterior, una de los principales planteamientos de la Procuraduría ha sido la de:

Instar a las partes a la celebración de acuerdos que en todo momento permitan a las y los adolescentes inmersos en la ley penal tomar conciencia de las consecuencias de su actuación delictiva y de las responsabilidades que de ella derivan y la reparación integral de los daños causados a las víctimas y que no estén supeditados a la formulación de la imputación (2016, p.297).

Al respecto, la Defensoría del Pueblo, subrayó en su informe de 2015 que en múltiples casos “se impone la privación de libertad sin que se evalúen otras alternativas de sanción establecidas en la ley y sin que se haya dado la posibilidad de tramitar opciones de justicia restaurativa y de principio de oportunidad, conforme a lo expresamente contemplado en la ley y de un modo viable frente al caso concreto” (p. 39). Este mismo documento expone que la privación de la libertad en Colombia no es una medida excepcional ya que, por ejemplo, se encuentran adolescentes, entre 14 y 16 años de edad, privados de la libertad “por conductas diferentes a las que prevén excepcionalmente como sanción la privación de la libertad para personas de este rango de edad, es decir, distintas a homicidio doloso, secuestro, extorsión en todas sus formas y delitos agravados contra la libertad, la integridad y la formación sexual”. Esta situación, subraya el documento, “contraviene preceptos legales, por lo que no se entiende el criterio de aplicación de

la sanción, sin atender ni la edad de las/los infractores, ni a la especialidad exigida por el tipo penal para la aplicación de la medida privativa de libertad (p. 39).

3.4 Empleo de la privación de libertad como mecanismo de “protección” y “garantía” de derechos.

En los diversos informes de monitoreo del SRPA consultados, aparece reiterada la manifestación de los adolescentes respecto a que, tanto los defensores de familia como los fiscales recomiendan la privación de la libertad del adolescente, ya sea a solicitud de los padres, basados en la carencia de recursos económicos o medios de subsistencia o basados en prejuicios frente a la situación del adolescente. Según se refiere, esto lleva a los jueces a optar por la privación de libertad como alternativa para “garantizarles derechos”, considerando que al quedar bajo el amparo institucional, los adolescentes dejan de estar inmersos en un contexto en el que por carecer de los medios necesarios de subsistencia pueden terminar participando en delitos. Esta práctica aparece como una alianza entre los actores procesales, que no solo resulta lesiva a los derechos de los adolescentes, sino que termina por constituirse en criminalización de la pobreza, maquillada como protección de derechos (Ministerio de Derecho y Justicia, 2017, p. 70).

3.5 La separación de adolescentes y adultos en los centros de internamiento

La ley de infancia y adolescencia estipula que la privación de la libertad de niños, niñas y adolescentes solo se cumplirá en establecimientos de atención especializada

en programas del Sistema Nacional de Bienestar Familiar y, dado el caso de que no existan éstos, el funcionario judicial deberá otorgarle al niños, niñas y adolescentes que haya cometido el ilícito la libertad provisional o la detención domiciliaria (art. 162). Esto responde a lo establecido en varios instrumentos internacionales (Reglas de la Habana (Regla 29) y en las Reglas de Beijing (Parágrafo 3 de la Regla 26) y a las consideraciones de la Corte IDH en diversos fallos en los cuales se plantea que para garantizar el derecho a la integridad personal de los niños, niñas y adolescentes privados de la libertad es indispensable que sean separados de los adultos, en consideración de su edad, pues existen “muchas pruebas de que el internamiento de niños en prisiones u otros centro de detención de adultos pone en peligro tanto su seguridad básica y bienestar como su capacidad futura de no reincidencia y de reintegración social” (Observación General N° 10, 2007).

La separación entre las personas menores de edad y las personas adultas, también se encuentra consagrada en el artículo 10 inciso 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) el cual dispone que los adolescentes que sean “procesados estarán separados de los adultos y deberán ser llevados ante los tribunales de justicia con la mayor celeridad posible para su enjuiciamiento”, así como el párrafo tercero de dicho artículo que señala que “el régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y la readaptación social de los penados. Los menores delincuentes estarán sometidos a un tratamiento adecuado a su edad y condición jurídica”.

Pese al reiterado énfasis que han hecho distintos instrumentos internacionales sobre la importancia de esta regla, en Colombia no se cumple a cabalidad. Según el diagnóstico presentado por el Ministerio de Justicia y del Derecho y OIM, en varias de las entrevistas realizadas por su equipo consultor, los operadores de los CAE afirmaron que personas de hasta 25 años pueden convivir con menores de 18 años durante la sanción de privación de libertad. Esto ocurre, según este documento, porque, si bien cometieron el delito antes de cumplir su mayoría de edad, fueron sentenciados ya siendo mayores y, a sus 25 años, están aún cumpliendo la condena (Ministerio de Justicia y del Derecho y OIM 2017, p. 49). En el documento mencionado, se afirma que este problema se agravó a partir de la Ley 1453 de 2011, por medio de la cual se eliminó un párrafo del artículo 187 del Código de la Infancia y la Adolescencia, el cual establecía los 21 años como límite para privación de libertad. “Al desaparecer este límite es que surge esta posibilidad de privar de libertad a jóvenes de 19 a 26 años, si se toma en cuenta la máxima sanción de algunos delitos antes de su prescripción” (Ministerio de Justicia y del Derecho y OIM, 2017, p. 49).

Por otra parte, la Defensoría del Pueblo encontró que, si bien “en la infraestructura y en la organización interna de los centros se tienen dispuestos lugares independientes y separados para los dormitorios de mayores de edad respecto a los de adolescentes, esta separación no se presenta en las actividades cotidianas, que se comparten en un mismo espacio de socialización: formación académica, deportiva y ocupacional, entre otras” (Defensoría del Pueblo, 2015, p. 47).

La posición de esta entidad es que, mientras no se hagan los ajustes necesarios para garantizar la separación física de los jóvenes mayores de 18 años respecto de los menores de 18 años, no se va a cumplir con la definición de SRPA, en tanto modelo especializado y diferencial, ni se podrá garantizar el cumplimiento de los tratados internacionales en este sentido.

El Informe de Monitoreo de la Garantía de los Derechos de los Adolescentes y Jóvenes Privados de la Libertad en el SPRA 2017 logró identificar que la no separación entre adolescentes y personas adultas, conlleva a un riesgo muy grande debido a que las personas adolescentes puedan ser víctimas de distintas manifestaciones de violencia, incluida la sexual.

A este respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sostiene que la privación de la libertad expone a los y las adolescentes a situaciones significativas de violencia, ya que dentro de los centros operan organizaciones criminales que pueden aprovecharse de vulnerabilidad de los adolescentes internados. Esta situación hace que el principio de la privación de la libertad como última ratio tenga un objetivo claro y sea el de proteger a las personas menores de edad, en aras de su interés superior, antes que “proteger” a la sociedad de quienes han cometido actos delictivos (CIDH, 2015 citado en Ministerio de Justicia y del Derecho y OIM, 2017, p. 23).

Dentro de los hallazgos del Catálogo de derechos el SRPA (2017, p. 126) encontró, la existencia en los centros de cuartos de aislamiento y celdas de castigo y la falta de

separación de adolescentes y adultos en algunos centros de privación de la libertad, lo cual es contrario a los estándares internacionales y resulta violatorio de sus derechos fundamentales.

3.5. La privación de la libertad como medida pedagógica

Como se señaló en capítulos anteriores, cuando se afirma que las sanciones que se pueden imponer a los adolescentes en el SRPA, incluyendo la libertad, deben tener una finalidad “pedagógica”, más allá de establecer la importancia de la educación al interior de los centros de internamiento, se subraya el hecho de que a través de dicho internamiento se debe poder encausar (sic) a los y las adolescentes hacia el respeto de las normas, el reconocimiento de los derechos y los deberes propios y ajenos, y la importancia que tienen sus actos en el tejido social. Es por ello que el SRPA debe procurar ante todo la inclusión de los y las adolescentes que se han visto involucrados en la comisión de delitos, a través de acciones que potencien su desarrollo y les ayuden a reconfigurar sus proyectos de vida, para que al final “sientan que cuentan con los recursos educativos, culturales, espirituales y ocupacionales que les permitan ser y sentirse parte de una sociedad, de una comunidad y de una familia más humana e incluyente” (ICBF, 2017, p. 94).

No obstante, estos postulados en la práctica del SRPA aún no ha superado del todo la idea de que es el castigo lo que genera la culpa y que es la culpa lo que transforma a las personas. La Defensoría del Pueblo en su informe de monitoreo encontró que en todos los centros visitados existen “espacios denominados de

“observación”, “reflexión” o con nombres semejantes, en los que se aísla a quienes infringen las normas de convivencia, entre dos y cuarenta días, tiempo durante el cual se les impide su participación en actividades deportivas, culturales y sociales”, destaca que las sanciones carecen de un fin pedagógico, restaurativo y preventivo (Defensoría del Pueblo, 2015, p. 42).

Otra de los aspectos que desvirtúa el carácter pedagógico del SRPA es que pese a que teóricamente “la finalidad del proceso de formación con los/las adolescentes y jóvenes del Sistema es lograr aprendizajes para la vida que le permitan re-direccionar su actuar y asumir una postura reflexiva frente a sus decisiones” (ICBF, s.f, p. 6, citado en Defensoría del Pueblo, 2015, p. 34) el accionar del Sistema se limita al control “a través de dispositivos de seguridad, vigilancia, control y represión” (Defensoría del Pueblo, 2015, p. 34). En este mismo sentido, la Defensoría del Pueblo resalta que la sensación que deja en los y las adolescentes su paso por el sistema es en la mayoría de los casos negativa, como se ilustra a continuación:

Se les preguntó a los/las adolescentes sobre sus sentimientos acerca de su paso por los centros de privación de libertad -y en consideración a las alternativas ofrecidas-, sobre su relación con los diferentes actores procesales, su expectativa de futuro y sobre modificaciones en su pensamiento -de acuerdo con los procesos implementados. Al respecto, ellos expresan sentimientos de frustración, tristeza, desesperanza, aburrimiento y resentimiento (Defensoría del Pueblo, 2015, p. 47).

En la misma línea de análisis, Montalvo (2011, p. 51) plantea que en el paradigma de la situación irregular se hablaba de medidas de seguridad fundamentadas en el peligrosismo, ahora hablamos de sanciones con un contenido pedagógico y fines protectores, educativos y restaurativos (Art. 178 del CIA). Sin embargo, a pesar de que ya no se habla de medidas de seguridad sino de sanciones, se trata de las mismas medidas que se aplicaban en el Código del Menor (amonestación, imposición de reglas de conducta, privación de la libertad en establecimientos especializados, etc.); así las cosas, se trata de unas sanciones que pueden tener finalidades diferentes, pero que en su naturaleza no dejan de causar sufrimiento, dolor y aflicción, limitando derechos del adolescente como la libertad y la familia.

Otro tema de gran relevancia planteado por la Defensoría del Pueblo es la importancia que tiene la infraestructura para el desarrollo del fin pedagógico de las medidas, y como esta puede tener efectos negativos en el proceso de los adolescentes. Así lo expone la entidad:

La Defensoría del Pueblo recomienda a las autoridades del SRPA prohibir la construcción de nuevos centros o proyectos de infraestructura, destinados a la privación de libertad de adolescentes, con arquitectura penitenciaria o carcelaria, proyectando en su lugar la construcción de espacios, instituciones y edificaciones que se enmarquen como establecimientos de educación, formación y ocupación del tiempo libre con perspectiva pedagógica, y que permitan construir proyectos de vida integrales (Defensoría del Pueblo, 2015, p. 24).

Finalmente, en el Plan decenal del sistema de justicia 2017- 2027 se determinó que es necesario fortalecer los canales de comunicación entre las diferentes entidades que integran el SRPA, procurando asistencia técnica permanente a los diferentes niveles de gobierno con el propósito de “articular, apoyar, asesorar e impulsar el logro de objetivos que impacten positivamente las condiciones en que se encuentran los adolescentes y jóvenes que ingresan al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes- SRPA”.

Frente a lo anterior conviene que el Ministerio de Justicia y derecho introduzca una modificación al Código de Infancia y Adolescencia con el fin de incentivar la aplicación de la justicia restaurativa, donde la víctima y el adolescente encuentren una salida alterna al conflicto generado con la comisión del punible, involucrando también a la familia de éste. La participación del adolescente debe ser activa, proponiendo formas de reparación, indemnización y satisfacción a las víctimas por los perjuicios irrogados y así concientizarse del daño causado. Además se debe diseñar un mecanismo de acompañamiento a las víctimas y al adolescentes que se garantice aún después de terminado el proceso penal, para efectos de verificar que se hayan cumplido los fines pedagógicos, sociales y de reincorporación a la sociedad que implican la justicia restaurativa. Esta función debe estar en cabeza del ICBF pero en coordinación con el Ministerio de Salud y Educación, para posibilitar que se brinden las medidas de atención en salud y en procesos educativos que le permitan al adolescente reintegración y rehabilitación (Ministerio de Justicia y Derecho, 2017, p. 135).

3.6. Prevención de la delincuencia juvenil

En las directrices de la RIAD (1990) se encuentran cinco principios para la prevención de la conducta punible que se sintetizan a continuación:

a) la prevención de la delincuencia juvenil es parte de la prevención del delito en la sociedad en su conjunto; b) se deben crear servicios y programas con base en la comunidad, sobre todo si no se han establecido organismos oficiales y sólo en última instancia se ha de recurrir a organismos oficiales de control social; c) es necesario que toda la sociedad vele por el desarrollo armonioso de los adolescentes, respete y cultive su personalidad y garantice su bienestar desde la primera infancia; d) la función activa y participativa de los adolescentes y jóvenes en la sociedad es de vital importancia, no deben ser considerados meros objetos de socialización; y, e) la política de prevención de la delincuencia que se adopte debe ser progresista, lo cual conlleva a evitar la criminalización de conductas que no afectan gravemente a la sociedad y sí perjudican el desarrollo del infractor (p.1).

En el Observatorio del Bienestar de la Niñez del ICBF (2015, p. 48) se identificaron y focalizaron algunos factores asociados a la comisión de delito como son la exclusión socioeconómica, la cultura de la ilegalidad, es decir conseguir fácil y en poco tiempo valores materiales, la convivencia en lugares donde hayan pandillas, bandas criminales, grupos armados al margen de la ley donde aprenden y refuerzan conductas violentas. A nivel familiar la inestabilidad conyugal, el abuso, la violencia intrafamiliar, maltrato o la falta de control. Por otro lado, la escuela es una

institución que puede convertirse en un factor de riesgo cuando se presentan pares negativos que influyen en sus compañeros para el consumo de sustancias psicoactivas y la incursión en la delincuencia. De la misma forma, la violencia, el matoneo, generan en los jóvenes resentimiento hacia profesores y discentes, distanciándose del sistema escolar y acercándose a pandillas y la ilegalidad.

En el mencionado documento el ICBF se trazaron tres líneas orientadoras de prevención del delito en tres niveles; a saber: MACRO, MESO y MICRO. A nivel macro se plantea ampliar coberturas de los programas de política social en salud, deporte, recreación y educación, que brinde más oportunidades a los jóvenes para reducir la brecha de desigualdad. Nivel meso, se pretende llevar a cabo programas de fortalecimiento de las familias como entorno protector, que facilite el ejercicio de los derechos de la niñez, estableciendo vínculos afectivos, de cuidado, comunicación y valores. Por último a nivel micro, el ICBF propone la creación de programas de prevención de consumo de sustancias psicoactivas en asocio con el Ministerio de Salud (Observatorio del Bienestar de la Niñez, 2015, p. 33).

Por su parte, la Comisión de evaluación del SRPA (2011) fue enfática en afirmar que el Sistema ha obviado algunos elementos claves para que su función social se cumpla a cabalidad, dentro de estos están: la participación de la sociedad, la prevención de la delincuencia y el fomento de oportunidades. Así expresa en el documento que:

Si bien el SRPA está centrado en judicializar los delitos que cometen los adolescentes, es urgente que el Estado (con la participación de la sociedad civil), se

anticipe al aumento de la delincuencia y prevenga desde el ámbito comunitario cualquier brote de criminalidad infantil o adolescente como aquellos que hoy asolan el país. El actual sistema de justicia juvenil está enfocado meramente en el plano coercitivo, dejando así de lado factores absolutamente determinantes como la prevención o el auspicio de oportunidades que garanticen una efectiva reinserción social, siendo así incompatible con los estándares internacionales en la materia. (Comisión de Evaluación, 2011, p. 29).

Para concluir el presente trabajo es pertinente establecer que la restricción de la libertad es la más empleada de las sanciones. A sabiendas de que muchos de los adolescentes infractores provienen de condiciones de marginalidad y pobreza, que en su mayoría carecen de educación escolar y presentan consumo de sustancias psicoactivas, situación de calle u orfandad, pareciese que privarlos de la libertad con el fin de “protegerlos” de su estado de indefensión, desconoce tratados internacionales que han sido claros en que el Estado debe ser cuidadoso y abstenerse de “penalizar la pobreza”, una práctica más que recurrente en el presente y anterior modelo de “situación irregular”.

CONCLUSIONES

Una de los mayores cambios introducidos a través de la ley 1098 de 2006 es el de la imputabilidad de los adolescentes mayores de 14 años, es decir que siendo sujetos de derechos, también deben ser tratados como personas responsables penalmente y en tal virtud pueden ser sancionados bajo alguna de las modalidades que se establecen en dicha ley.

Tanto en los casos de infracciones cometidas por adultos como por niños, niñas y adolescentes, el sistema penal se debe considerar como la última Ratio, pues su aplicación es de carácter residual, cuando se trate de delitos graves, siempre procurando garantizar el interés superior del niño, analizando profundamente las condiciones particulares del joven y las necesidades de la sociedad.

La privación de la libertad de niños, niñas y adolescentes, como último recurso, por el menor tiempo posible, en establecimientos separados de los adultos y como medida pedagógica, son unos de los más importantes estándares que deben privilegiarse, no solo cuando al aplicar la detención preventiva, sino cuando se impone como sanción posterior a la sentencia, por parte de los funcionarios competentes, para efectos de acatar los diferentes instrumentos internacionales de protección a los jóvenes privados de la libertad.

Estas pautas, al menos teóricamente, fueron respetadas en el Sistema de Responsabilidad de Adolescentes, en observancia a los tratados internacionales, especialmente con lo estipulado por las Reglas de Beijing y la Habana. Pese a esto, la

privación de la libertad sigue constituyendo una controversia al interior de los ordenamientos jurídicos, pues la dicotomía entre la justicia restaurativa y la retributiva ha puesto a la sanción de la privación de la libertad en un plano sospechoso para los seguidores de ambos enfoques. Así, el SRPA no cumple con los estándares de la justicia restaurativa, ni tampoco con el espíritu protector y educativo que deben tener las sanciones privativas y no privativas de la libertad, las cuales marcan la diferencia con el sistema penal para los adultos (Castellón, 2012, p. 28).

Son necesarias llevar a cabo las reformas correspondientes para que este sistema sea más efectivo para que en realidad se materialice su carácter específico y diferenciado, puesto que aún no se cuenta con el personal especializado e idóneo para garantizar una debida atención derechos, desde una perspectiva pedagógica a los adolescentes en conflicto con la ley penal.

El SRPA no es un procedimiento autónomo e independiente, motivo por el cual se remite a lo normado en la ley 906 de 2004, con lo cual se afectan los principios de especial, diferencial y pedagógico del esquema de justicia juvenil.

El catálogo de derechos del SRPA (2017, p.126) encontró que en algunos centros de atención especializada del País, se instalaron celdas de castigo o aislamiento, que eran compartidas por adultos y N.N.A, transgrediéndose la regla de la separación de estos grupos etarios.

Se afecta la regla del objetivo pedagógico de la medida, con la escasa aplicación de la justicia restaurativa y el principio de oportunidad, los cuales convergen en el propósito de humanizar la justicia, acercar a las víctimas y los jóvenes en conflicto con la ley penal, a fin de que reconozcan su error, demuestren su arrepentimiento, reparen a las víctimas y se reconstruya el tejido social.

Aunque se reconoce que se ha avanzado bastante desde la promulgación de la ley 1098 de 2006, todavía se presentan muchas falencias como la ausencia de información y monitoreo permanente que identificar el cumplimiento de las medidas privativas y no privativas de la libertad y si en realidad se cumple con los objetivos pedagógicos que estas entrañan, tal como se evidenció en El Plan decenal del sistema de justicia 2017- 2027.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Alcaldía Mayor de Bogotá. ¿Responsabilidad penal o social? Adolescentes en el Sistema de Responsabilidad Penal (SRPA) (2015, enero-marzo).
http://www.sdp.gov.co/sites/default/files/rostros_rastros_9.pdf
- Castellón, Y. (2012, noviembre). La Privación De La Libertad En El Sistema De Responsabilidad Penal Para Adolescentes En Colombia.
<https://repository.usergioarboleda.edu.co/bitstream/handle/11232/543/La%20privaci%C3%B3n%20de%20la%20libertad.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Calvo, J (2014, marzo, 2). Aproximaciones conceptuales al principio de progresividad y no regresividad de los derechos constitucionales.
<https://revistas.usergioarboleda.edu.co/index.php/visiuris/article/download/214/192>
- Colombia. Presidencia de la Republica (1989, 27, noviembre). Decreto 2737 por el cual se expide el Código Del Menor. Derogado por el art. 217, Ley 1098 de 2006 a excepción de los artículos 320 a 325 y los relativos al juicio especial de alimentos.
<http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=4829>
- Colombia. Congreso De La República (2006, 08, noviembre). Ley 1098 de 2006. Por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia. Diario Oficial No. 46.446 de 8 de noviembre de 2006.
https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_1098_2006.htm
- Colombia. Congreso de Colombia (2000, 24, julio). Ley 599 de 2000. Por la cual se expide el Código Penal. Diario Oficial No. 44.097 de 24 de julio del 2000.
http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0599_2000.html
- Corte Interamericana de Derechos Humanos Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaya Vs. Paraguay (2006, marzo, 29). Juez Manuel E. Ventura Robles.
- Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión consultiva OC-17. (2002, Agosto, 28). Párr. 93.214. Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño. Opinión Consultiva OC-17/02 de 28 de agosto.
<https://derechopenalonline.com/ninos-ninas-y-adolescentes-robo-agravantes-homicidio-declaracion-de-responsabilidad-rebeldia-exencion-de-prision-derecho-penal-juvenil-convencion-sobre-los-derechos-del-nino-interes-superio/>
- Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Bulacio Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 18 de septiembre de 2003, párr. 136; Caso

“Instituto de Reeducción del Menor” Vs. Paraguay. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de septiembre de 2004, párr. 175; Asunto de los Niños y Adolescentes Privados de Libertad en el “Complexo do Tatuapé” da FEBEM respecto Brasil. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 30 de noviembre de 2005, párr. 136.

Congreso de la República. Proyecto de ley por medio del cual se modifica el código de infancia y adolescencia y se dictan otras disposiciones (2015, marzo, 15).

<http://leyes.senado.gov.co/proyecto-de-ley-por-medio-del-cual-se-modifica-el-código-de-infancia-y-adolescencia-y-se-dictan-otras-disposiciones>

Croda et al (2016, enero- abril, 12). Modelos de investigación cualitativa y cuantitativa y su aplicación en el estudio del derecho.

<https://ux.edu.mx/wp-content/uploads/2.-Modelos-de-investigaci%C3%B3n-cualitativa-y-cuantitativa-y-su-aplicaci%C3%B3n-en-el-estudio-del-derecho.pdf>

Declaración Americana de Derechos del Hombre y el Ciudadano (DADHC), anunciada en la IX Conferencia Internacional Americana, celebrada en Bogotá, Colombia en mayo de 1948.

Holguín, G. (2010, mayo, 03). Construcción histórica del tratamiento jurídico del adolescente infractor de la ley penal colombiana (1837-2010).

<http://www.scielo.org.co/pdf/crim/v52n1/v52n1a06.pdf>

Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes (IIN), organismo especializado de la Organización de los Estados Americanos, en el documento de posicionamiento de los Sistemas de Responsabilidad Penal de adolescentes.

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Observatorio del Bienestar de la Niñez, Adolescentes, Jóvenes y Delitos: “Elementos para la comprensión de la delincuencia juvenil en Colombia” del Bienestar de la Niñez (2015, agosto).
[file:///C:/Users/ALEJANDRA/Downloads/delincuencia_juvenil_ICBF%20-%20CAPITULO%20III%20\(2\).pdf](file:///C:/Users/ALEJANDRA/Downloads/delincuencia_juvenil_ICBF%20-%20CAPITULO%20III%20(2).pdf)

IDH, Justicia Juvenil y Derechos Humanos en las Américas, (Chile: UNICEF, BID, Save the Children-Suecia, 2011) párr. 350.

Juárez, A. (2016, diciembre, 08). Las Restricciones Y/O Limitaciones A La Libertad En La Justicia Para Adolescentes.

<http://derechopormexico.com/las-restricciones-limitaciones-la-libertad-la-justicia-adolescentes>

Justicia Juvenil: Instrumentos Internacionales. Colección Textos Internacionales (2011).
[http://www.icbf.gov.co/portal/pls/portal/DEV_PORTAL.wwsbr_imt_services.GeneraView?p_docname=1736072.PDF&p_type=DOC&p_viewservice=VAHWSTH&p_searchstring=\(%24%7Bescala%7D\)](http://www.icbf.gov.co/portal/pls/portal/DEV_PORTAL.wwsbr_imt_services.GeneraView?p_docname=1736072.PDF&p_type=DOC&p_viewservice=VAHWSTH&p_searchstring=(%24%7Bescala%7D))

Llamas, E. (2014, noviembre, 28). La Pena Máxima en el Derecho Penal Juvenil. p. 58
<http://www.pensamientopenal.com.ar/system/files/2015/07/doctrina41492.pdf>

Llobet, J. (2017, noviembre, 21). La Justicia Penal Juvenil En La Jurisprudencia De La Corte Interamericana De Derechos Humanos (Con Especial Referencia A Centroamérica).
<https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/juridicas/article/download/29018/29057/>

Martínez, J. (s.f.). Resultados primarios del sistema de responsabilidad penal para adolescentes: evolución o involución de un sistema con vocación de reforma
<https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4133592.pdf>

Mariño, C (2013). Excepcionalidad de la privación de la libertad en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes.
<https://books.openedition.org/uec/258?lang=es>

Montalvo, C. (2011 Enero – Junio). Sistema de Responsabilidad penal juvenil en Colombia. Revista Pensamiento Americano ISSN: 2027-2448 Vol. 2 No. 6. P. 57-61.

<https://docplayer.es/23410841-Delincuencia-y-responsabilidad-penal-juvenil-en-colombia.html>

Ministerio de Justicia y Derecho. Monitoreo de la Garantía de los Derechos de los Adolescentes y Jóvenes Privados de la Libertad en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes -Informe Final-. (2017, Marzo).
[file:///C:/Users/ALEJANDRA/Downloads/Monitoreo%20de%20la%20Garant%C3%ADa%20de%20los%20Derechos%20de%20los%20A%20y%20J%20privados%20de%20libertad%20en%20el%20SRPA%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/ALEJANDRA/Downloads/Monitoreo%20de%20la%20Garant%C3%ADa%20de%20los%20Derechos%20de%20los%20A%20y%20J%20privados%20de%20libertad%20en%20el%20SRPA%20(1).pdf)

Ministerio de Justicia y Derecho. Documento metodológico para la implementación del programa de seguimiento judicial al tratamiento de drogas en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes -SRPA- (2017).

documento_metodologico_implementacion_programa_seguimiento_judicial_tratamiento_drogas_sistema_responsabilidad_penal_%20adolescentes%20(2).pdf

Ministerio de Justicia y Derecho. Sistema de responsabilidad penal para adolescentes, hacia la protección integral y la justicia restaurativa (2015, noviembre).

<https://www.minjusticia.gov.co/Portals/0/sala%20de%20prensa/documentos/Sistema%20de%20Responsabilidad%20Penal%20para%20Adolescentes%20hacia%20la%20proteccion%20integral.pdf>

Naciones Unidas. Convención sobre los Derechos del Niño. Comité de los derechos del niño 44º período de sesiones. Observación General N° 10 (15 de enero a 2 de febrero de 2007).

https://www.right-to-education.org/sites/right-to-education.org/files/resource-attachments/CRC_Observacion_General_10_ES.pdf

Nogueira, H. (s.f.). Alcalá en el Los estándares de la CIDH sobre niños en situación de riesgo como grupo vulnerable que requieren de medidas especiales de protección por parte del Estado.

<http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/pensamientoconstitucional/article/view/14890>

ONU (1985). Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores A.G. res. 40/33, anexo, 40 U.N. GAOR Supp. (No. 53) p. 207, ONU Doc. A/40/53 (1985). P. 139, 140.
<https://www.unicef.org/panama/spanish/7972.htm>

Pacto Internacional De Derechos Civiles Y Políticos

<http://www.aprodeh.org.pe/documentos/marco-normativo/legal/Pacto-Internacional-de-Derechos-Civiles-y-Politicos.pdf>

Pacto De San José De Costa Rica Convención Americana Sobre Derechos Humanos

<http://www.derechopenalenlared.com/legislacion/pacto-san-jose-costa-rica.pdf>

Parra, F. (2015). La sanción a los menores infractores de la ley penal en un estado social y democrático de derecho.

<https://repository.unilivre.edu.co/bitstream/handle/10901/9264/%e2%80%9cla%20sancion%20a%20los%20menores%20infractores%20de%20la%20ley%20penal%20en%20un%20estado%20social%20y%20democr%C3%81tico%20de%20derecho.pdf?sequence=1&isallowed=y>

[Peñuela, C. \(2018\). El sistema de responsabilidad penal de adolescentes en Colombia desde un análisis económico del derecho.](#)

<https://revistas.ugca.edu.co/index.php/inciso/article/view/868>

Proceso Gestión Responsabilidad Penal Lineamiento Modelo De Atención Para Adolescentes Y Jóvenes En Conflicto Con La Ley-SRPA (2016, febrero, 24).

[http://www.icbf.gov.co/portal/pls/portal/DEV_PORTAL.wwsbr_int_services.GenericView?p_docname=22125444.PDF&p_type=DOC&p_viewservice=VAHWSTH&p_searchstring=\(%24%7Bsexualidad%7D\)](http://www.icbf.gov.co/portal/pls/portal/DEV_PORTAL.wwsbr_int_services.GenericView?p_docname=22125444.PDF&p_type=DOC&p_viewservice=VAHWSTH&p_searchstring=(%24%7Bsexualidad%7D))

Ramírez, J. (2011, enero- junio). Justicia Penal Para Adolescentes, Principios Y Jurisprudencia. Revista de Derechos Humanos y Estudios Sociales. ISSN 1889-8068. p. 119.

Rosales, L. (s.f). El Proceso De Apropiación De La Libertad.

<https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2129081.pdf>

Universidad Santo Tomás, Facultad de Derecho. (2008). Metodología de la Investigación jurídica y sociojurídica. Módulos 56

Villadiego, C. (2016, julio, 03). Sistemas penales para adolescentes en América Latina. https://cdn.dejusticia.org/wp-content/uploads/2017/04/fi_name_recurso_857.pdf

Violaciones a los Derechos Humanos de adolescentes privados de la libertad. Defensoría del Pueblo. (2015, Marzo)

<http://www.defensoria.gov.co/public/pdf/ViolacionesDDHHadolescentesprivadoslibertad.pdf>